

Narcotráfico: Génesis de los paramilitares y herencia de bandas criminales

Camilo Echandía Castilla

Fundación **Ideas para la paz**

Narcotráfico: **Génesis de los paramilitares** **y herencia de bandas** **criminales**

Camilo Echandía Castilla*

Bogotá, enero de 2013
Serie Informes No. 19

Contenido

Narcotráfico:

Génesis de los paramilitares y herencia de bandas criminales

5	Introducción
7	1. Desarrollo del MAS, sometimiento a la justicia y persistencia del fenómeno paramilitar (1981-1993)
11	2. Las autodefensas buscan reconocimiento político y registran su más fuerte expansión territorial (1994-2002)
19	3. Tras su desmovilización las autodefensas son relevadas por bandas en escenarios donde persiste el narcotráfico (2003-2012)
28	Sinopsis
32	Referencias

Introducción

A pesar de que la denominación de grupos paramilitares o de autodefensa no corresponde estrictamente con la naturaleza y los propósitos de los grupos que han existido en Colombia en los últimos treinta años, caracterizados principalmente por su fuerte relación con el narcotráfico, su alto impacto en la población civil a través de la violencia y la gran autonomía que han tenido del Estado, se ha terminado aceptado el uso de estos vocablos.

También se ha aceptado que tales grupos surgieron por la demanda de seguridad en zonas afectadas por la guerrilla. Sin embargo, al considerar la experiencia de muchas regiones con presencia de estas organizaciones, cabe preguntarse si su oferta de protección no fue mayor a la demanda; si la protección que ofrecieron involucró el uso real o potencial de la violencia; y si, en lugar de acabar con una situación de inseguridad, no terminaron más bien alimentándola¹.

Bajo la denominación de autodefensas se desmovilizó entre 2003 y 2006 una variada gama de grupos armados, que buscó un tratamiento político por parte del Estado o justificó su existencia en razón a la amenaza de la guerrilla, para encubrir sus verdaderos intereses. El carácter de las acciones, el sentido de las estrategias y la extrema crueldad de los métodos utilizados contra la población civil, ponen de presente que los intereses de estos grupos desbordan la pretendida dimensión contrainsurgente y se concentran, principalmente, en la protección de los cultivos y las tierras adquiridas mediante la presión, así como en el control de rutas y puertos para la exportación de droga, todo lo que hoy en día constituye la razón de ser de las denominadas bandas criminales.

Con esta nueva denominación se pone en primer plano que las desmovilizaciones llevadas a cabo en el primer gobierno Uribe Vélez, condujeron al fin del paramilitarismo ya que las bandas criminales no tienen una orientación política. Sin embargo, la dimensión contrainsurgente no fue el objetivo central de los grupos desmovilizados, y por lo tanto, las bandas del presente tienen continuidad con las organi-

zaciones que han existido en el país en los últimos treinta años en estrecha relación con el narcotráfico.

En este trabajo se identifican tres periodos en la evolución de las organizaciones armadas ilegales asociadas al narcotráfico entre 1981 y 2012, tal como se observa en el gráfico 1 (página siguiente). A partir de esta periodización se busca, sobre todo, poner en relación temporal y espacial las tendencias más notorias en la evolución de las organizaciones asociadas al narcotráfico que han existido desde comienzos de los años ochenta del siglo pasado, con las tendencias de evolución del conflicto armado, los cultivos de coca, los asesinatos y las masacres, para establecer una eventual incidencia, e identificar las rupturas y continuidades que puedan existir entre los grupos paramilitares o de autodefensa del pasado y las bandas criminales del presente con influencia, principalmente, en el ámbito rural².

Aunque no se cuenta con los elementos suficientes para esclarecer el complejo entramado de la violencia asociada a estas organizaciones, la evidencia que se presenta en este trabajo indica que los asesinatos y las masacres se incrementan de manera importante en los escenarios donde se producen disputas por el control de circuitos ilegales estratégicos para el narcotráfico.

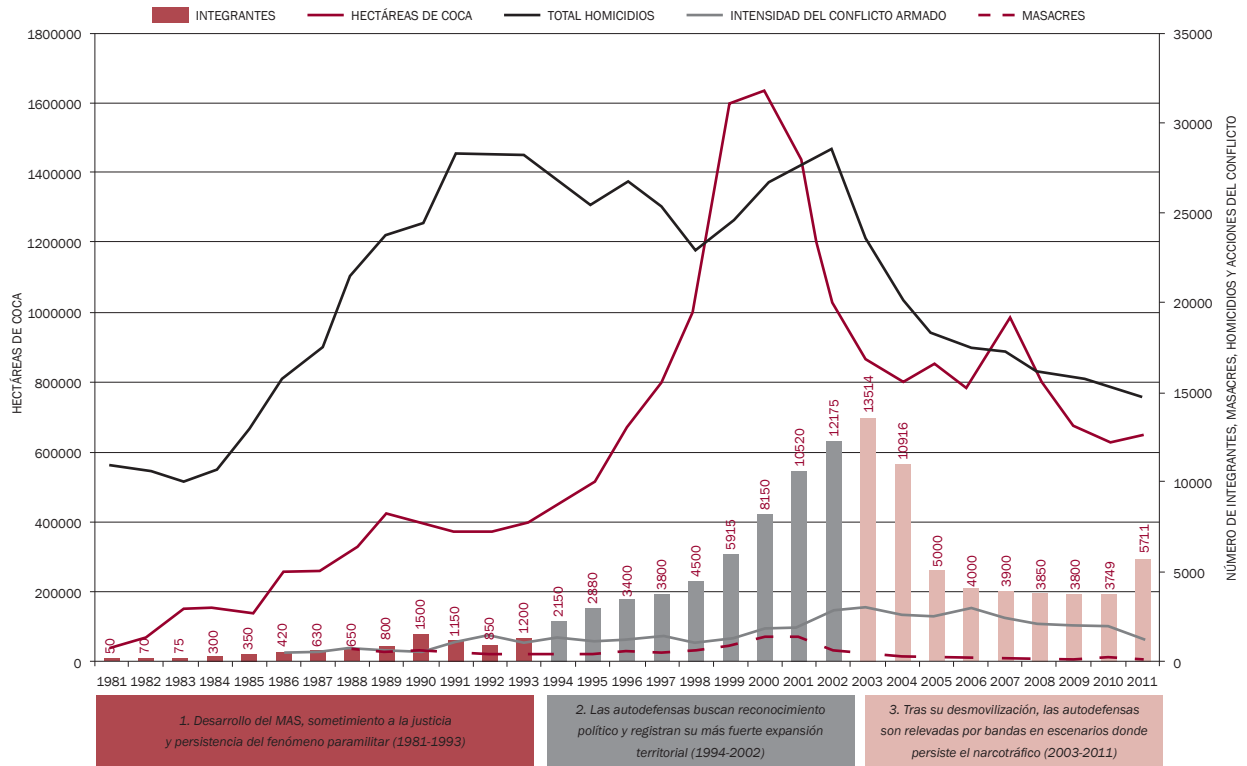
* Docente e investigador de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Este trabajo se elaboró en el marco del proyecto de investigación "Seguimiento y análisis del conflicto armado en Colombia", de la línea de investigación en Negociación y Manejo de Conflictos del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE).

¹ Daniel Pécaut (2001) ha señalado que no hay que conformarse con la lógica de protección a la que todas las organizaciones armadas acuden para justificar su existencia, como si constituyera una simple respuesta a una demanda de seguridad, que lograra establecer un dispositivo de confianza permanente.

² En lo fundamental se usaron las cifras de homicidios suministrados por la Policía Nacional y las tasas calculadas con base en información de población del DANE. Así mismo, se usaron los datos de masacres que registra la Policía. Del Observatorio de Derechos Humanos y DIH de la Vicepresidencia de la República se obtuvieron los asesinatos cometidos por actores organizados de violencia y las acciones armadas producidas en el conflicto.

GRÁFICO 1

PERIODIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES ASOCIADAS AL NARCOTRÁFICO Y LAS DINÁMICAS DE LA VIOLENCIA, LOS CULTIVOS DE COCA Y EL CONFLICTO ARMADO (1981-2011)



Fuente: Policía Nacional- Observatorio del Programa Presidencial de DD.HH y DIH de la Vicepresidencia de la República.

1. Desarrollo del MAS, sometimiento a la justicia y persistencia del fenómeno paramilitar (1981-1993)

Aunque los grupos paramilitares o de autodefensa fueron, en un principio, amparados por la ley, en su evolución van quedando al servicio de grandes propietarios rurales y de narcotraficantes interesados en proteger sus territorios³. De aquí que el origen de los grupos que se desmovilizaron entre 2003 y 2006, se ubique hacia comienzos de la década de los años ochenta, con la creación del grupo Muerte a Secuestradores (MAS) por parte de sectores del narcotráfico afectados por los secuestros de la guerrilla⁴.

Narcotraficantes como Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha crearon los primeros grupos en defensa de sus propiedades como, por ejemplo, el MAS en el Magdalena Medio, sobre todo en Puerto Boyacá (Medina, 1990). Las organizaciones creadas a nivel rural por narcotraficantes, cumplen con la función de amparar la expansión territorial del narcotráfico mediante la adquisición de tierras, que para comienzos de los años noventa se estimaba en cuatro millones de hectáreas localizadas en cerca de 400 municipios (Reyes, 2009).

En la mayoría de las zonas ganaderas afectadas por la presencia guerrillera y donde se registran conflictos agrarios, los narcotraficantes aliados con propietarios tradicionales introdujeron “seguridad” mediante la conformación de grupos armados. Los mapas, elaborados por el sociólogo Alejandro Reyes (1991), dan cuenta de estos procesos hacia finales de la década del ochenta y comienzos de los años noventa.

A partir de 1982, la violencia se incrementó ostensiblemente. Las denuncias de los sectores afectados originaron una investigación llevada a cabo por la Procuraduría General de la Nación, en coordinación con la Dirección Nacional de Instrucción Criminal. Las conclusiones de dicha investigación reveladas a la opinión pública por el procurador

Carlos Jiménez, señalaban a los grupos de autodefensa como los principales responsables de la intensificación de las muertes, contando con el apoyo de miembros activos del Ejército y la Policía (Medina, 1990).

Para entender la relación entre el incremento de la violencia y la actuación de los grupos de autodefensa, es importante tener en cuenta la coyuntura del proceso de paz en el gobierno Betancur, en la cual las FARC se propusieron aprovechar el pacto de cese al fuego para avanzar en la ejecución de su plan estratégico. En medio de esta tregua, las FF.MM. no desarrollaban operaciones y, por lo tanto, las FARC podían agruparse, entrenar, reclutar, buscar nuevos contactos para adquirir armamento, así como establecer estrategias y definir posiciones políticas, reafirmar el control sobre sus unidades y fortalecer el comando central (Dudley, 2008).

Por otra parte, el incremento de los secuestros realizados por la guerrilla en este periodo llevó a sectores del narcotráfico a organizar aparatos armados propios. Para impedir que se siguieran cometiendo secuestros atacaron a los integrantes de las redes de apoyo de la guerrilla y, sobre todo, a miembros de organizaciones políticas y sindicales que hacían pasar como bases de la subversión.

Adicionalmente, el recrudecimiento de la violencia se relaciona con la ruptura de los acuerdos que por tiempo prolongado existieron entre la guerrilla y el narcotráfico en áreas de la producción de coca, ubicadas sobre todo en el suroriente del país⁵. En el proceso de fortalecimiento del aparato militar de las FARC, el grupo guerrillero comenzó a imponerles a los narcotraficantes sus condiciones, el pago de “impuestos” y el reconocimiento de su predominio. Las desavenencias comenzaron a expresarse, por parte de la guerrilla, en asaltos contra las instalaciones para el procesamiento de la coca, con el fin de sustraer el producto refinado, armas y dinero. En las zonas donde los desacuerdos fueron más fuertes, se desataron verdaderas oleadas de violencia principalmente contra dirigentes y seguidores de la Unión Patriótica⁶.

³ Por medio del Decreto 3398 de 1965 y la Ley 48 de 1968, se autorizó la creación de autodefensas para realizar tareas tendientes al restablecimiento de la normalidad en el orden público. Así mismo, se permitió la instrucción y dotación de armas a la población civil por parte de las Fuerzas Armadas.

⁴ El MAS surge en 1981 cuando no se había producido la ruptura entre los carteles de Medellín y de Cali. El precedente es el aumento de las presiones de las guerrillas a los narcotraficantes y el factor desencadenante es el secuestro de Marta Nieves Ochoa, hermana de varios de los integrantes del cartel de Medellín, los hermanos Ochoa, ocurrido el 12 de noviembre de 1981.

⁵ Los acuerdos entre las FARC y el narcotráfico salieron a la luz pública en 1984 con el descubrimiento en los llanos del Yarí, de *Tranquilandia*, un complejo de producción de cocaína propiedad de Pablo Escobar. La relación de la guerrilla con el narcotráfico se había establecido desde finales de la década anterior con la llegada del cartel de Medellín al departamento del Caquetá.

⁶ Mediante el acuerdo de La Uribe, firmado por las FARC y el Gobierno en 1984, se pactó un proceso de paz gradual que se facilitaría con la creación de un partido (la Unión Patriótica, UP), que permitiría la integración de la guerrilla al ejercicio de la política legal (Dudley, 2008).

Luego de expulsar a la guerrilla de la zona sur del Magdalena Medio, utilizando una táctica que evitaba al máximo los enfrentamientos directos con las estructuras armadas y, en cambio, atacaba el eslabón más débil, representado en las redes de apoyo, grupos seleccionados de paramilitares que operaban allí, ayudaron a entrenar a otros semejantes en Córdoba, Urabá, Putumayo y la región del Ariari en el Meta (Reyes, 1991).

Con la extensión del modelo Puerto Boyacá a otras regiones del país, las autodefensas experimentan su primer gran impulso, que se expresa en el elevado número de asesinatos y masacres que se comienza a producir. Mediante el uso de la violencia se llevó a cabo un proceso de “contra-reforma agraria” que obligó al campesino a vender o abandonar sus tierras. También se introdujo un rápido proceso modernizador de la actividad agropecuaria, resultado de la adopción de nuevas tecnologías que determinaron la transformación del latifundio tradicional en empresa agropecuaria que demanda maquinaria y trabajadores calificados para el manejo de tecnologías modernas. Todo esto trajo consigo la elevación de los costos generales de la mano de obra calificada, el alquiler de la maquinaria y los precios de la tierra (Bejarano, et. al.,1997).

Hacia finales de la década del ochenta los grupos de autodefensa que habían crecido de la mano del narcotráfico, ostentaban un enorme poder ofensivo⁷. En consecuencia, la administración Barco, terminó reconociendo el grave peligro que representaban estos grupos convertidos en verdaderos ejércitos al servicio de la mafia, y por lo tanto, en 1989, mediante la derogatoria del mencionado decreto de 1965, los declaró ilegales. Este mismo año, en Sucre, fue dado de baja por la Policía, José Gonzalo Rodríguez Gacha, uno de los principales responsables del incremento de la violencia.

Es importante anotar que aunque la administración Barco se había propuesto seguir el camino de la negociación con la guerrilla bajo nuevas pautas, la tregua acordada en el gobierno Betancur se rompió en el mes de junio

de 1987, a raíz de que las FARC tendieron una emboscada a un patrulla militar en Puerto Rico (Caquetá), que cobró la vida de dos oficiales y veinticuatro soldados. Para ese momento, era claro que las FARC, siguiendo la estrategia de la “combinación de todas las formas de lucha”, estaba aprovechado tácticamente el cese al fuego acordado para fortalecerse y ampliar su presencia territorial.

Hacia comienzos de 1988, el ELN realizó secuestros con fines propagandísticos en el momento en que se llevaba a cabo la primera elección popular de alcaldes. Por su parte, las FARC, que registraban un bajo protagonismo armado mientras que la UP ganaba las alcaldías de 23 municipios, parecían más concentradas en la estrategia política. Sin embargo, el peso que las FARC daban a la acción militar en detrimento de lo político se hizo mayor a partir de este momento, en el que la violencia dirigida contra el movimiento surgido de los acuerdos de La Uribe registraba los niveles más elevados⁸.

Entre 1988 y 1991 el incremento de la violencia tiene una mayor responsabilidad en las estructuras al servicio del narcotráfico. Entre las víctimas se encuentran funcionarios del Estado, dirigentes y militantes de la UP y los partidos tradicionales, así como miembros de organizaciones sociales. A partir de 1992 se registra una importante reducción de los asesinatos de miembros de organizaciones políticas y sociales fuertemente golpeadas en los años anteriores. Pese a que la reducción de la violencia originada en actores organizados es marcada, los asesinatos cometidos por la guerrilla comenzaron a recaer en dirigentes y militantes del movimiento Esperanza, Paz y Libertad, con posterioridad a la negociación que condujo a la desmovilización del Ejército Popular de Liberación.

En la administración Gaviria, mediante los decretos 2047 y 3030 de 1990 y 303 de 1991 que contemplaban reducción de penas y confesión voluntaria, las autodefensas en varias regiones se sometieron a la justicia. En ese momento, fueron tres los grupos que se desmovilizaron e

⁷ Una investigación llevada a cabo por el DAS en 1987 permitió establecer que las masacres ocurridas en la región de Urabá, ejecutadas por una organización con asiento en el Magdalena Medio, en alianza con otra ubicada en el departamento de Córdoba, tuvieron como autores intelectuales a reconocidos “capos” del narcotráfico. De otra parte, la masacre de La Rochela, ocurrida en enero de 1989, en el bajo Simacota, donde un grupo armado atacó y dio muerte a los integrantes de una comisión judicial que investigaba las masacres y los asesinatos que se venían cometiendo en el Magdalena Medio, demostró que la acción de las autodefensas también se dirigía contra agentes del Estado.

⁸ Los enemigos de la UP eran muchos y aumentaban cada día, señala Steven Dudley (2008). Había miembros de los partidos tradicionales que veían al partido surgido de la guerrilla como un nuevo desafío electoral, especialmente en las áreas rurales. Había miembros de la Fuerza Pública que veían el plan nefasto de las FARC de utilizar a la UP como parte de la estrategia de la combinación de todas las formas de lucha y lo que es más importante, había narcotraficantes entre los que se destacaba Gonzalo Rodríguez Gacha, aliado de Pablo Escobar, que veían a la UP como una amenaza para su recién obtenido estatus de terratenientes y ganaderos y a su progenitor, las FARC, como la principal amenaza contra sus intereses en el negocio de las drogas ilícitas. Daniel Pécaut (2008), coincide con el autor citado en que la tragedia de la UP también radicó en que las FARC se encargaron de impedir que en el movimiento prosperara la vertiente que propugnaba por el distanciamiento de la lucha armada.

hicieron entrega de las armas: un reducto compuesto por cerca de 200 hombres del grupo de Rodríguez Gacha en Pacho (Cundinamarca), el que actuó en Puerto Boyacá, al mando de Ariel Otero, con cerca de 400 integrantes y el de Fidel Castaño que entregó 600 fusiles, así como varias haciendas en su zona de influencia en Córdoba y Urabá.

A pesar de que se llevan a cabo estas desmovilizaciones, como se puede inferir de la comparación de los mapas 1 y 2, el dispositivo de las autodefensas mantuvo un cubrimiento territorial significativo, e incluso se amplió, aunque al mismo tiempo se impuso la fragmentación, es decir, la poca unidad entre las agrupaciones que persisten, resultado directo de las divisiones al interior del cartel de Medellín (Escobedo, 2011). En el sur del Magdalena Medio, donde Rodríguez Gacha y Pablo Escobar habían sido determinantes, persistieron expresiones muy variadas, divididas y desarticuladas, pero su influencia se amplió al centro y el norte y particularmente, en el sur del Cesar. En Córdoba y Urabá,

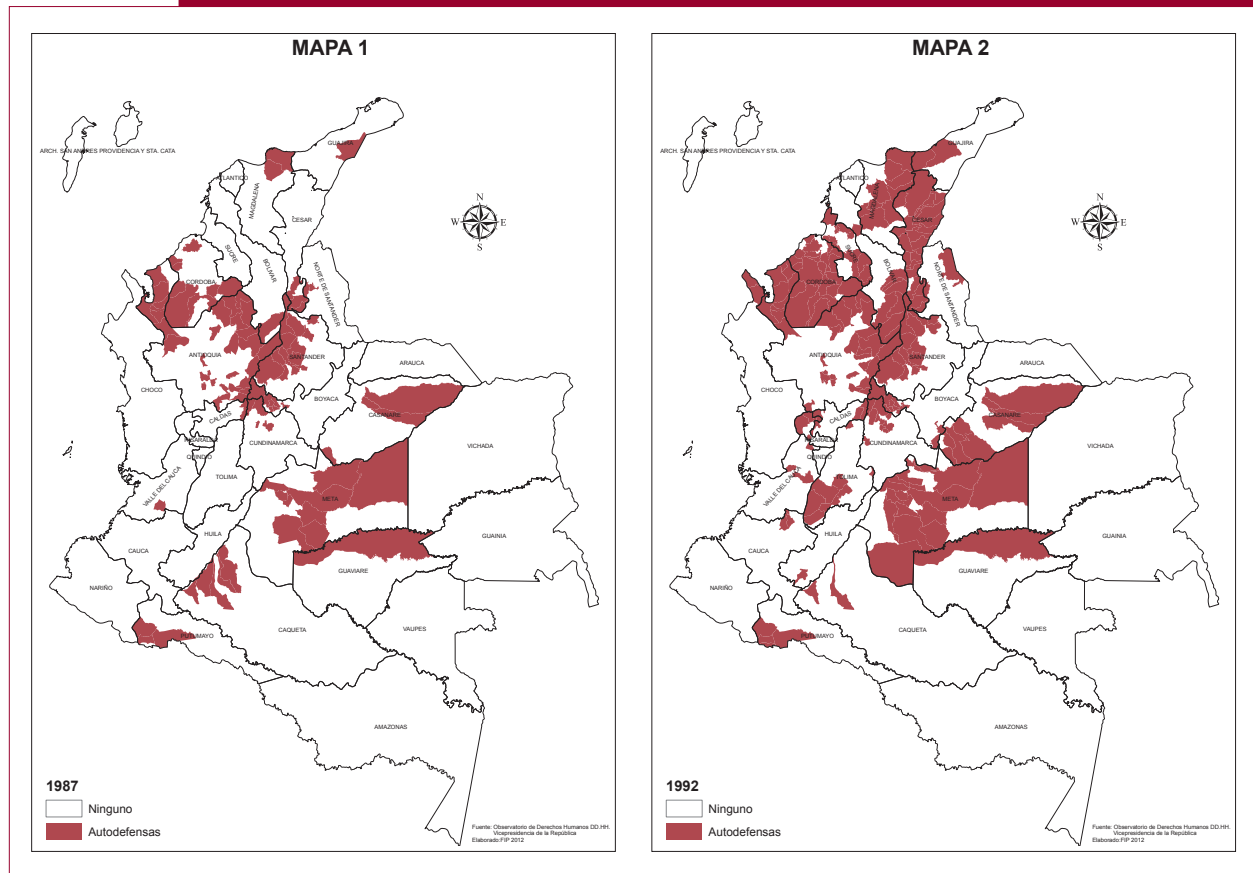
donde Fidel Castaño jugaba un papel muy importante, bajaron su perfil significativamente entre 1992 y 1993.

En los mapas 3, 4 y 5 (página siguiente) se observa una muy significativa correspondencia entre los municipios donde las autodefensas tienen presencia entre 1987 y 1992 y los altos niveles que registran las tasas de homicidio en los municipios donde ocurren las masacres y/o asesinatos⁹. La correspondencia entre las elevadas tasas de homicidios y los escenarios con presencia de los grupos irregulares, es especialmente significativa en el Urabá antioqueño, Bajo Cauca, Magdalena Medio, zona bananera del Magdalena y Ariari.

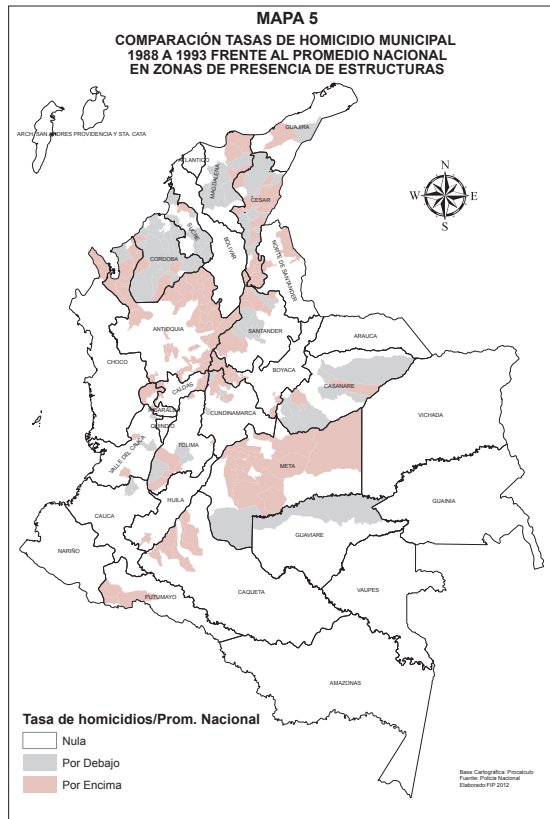
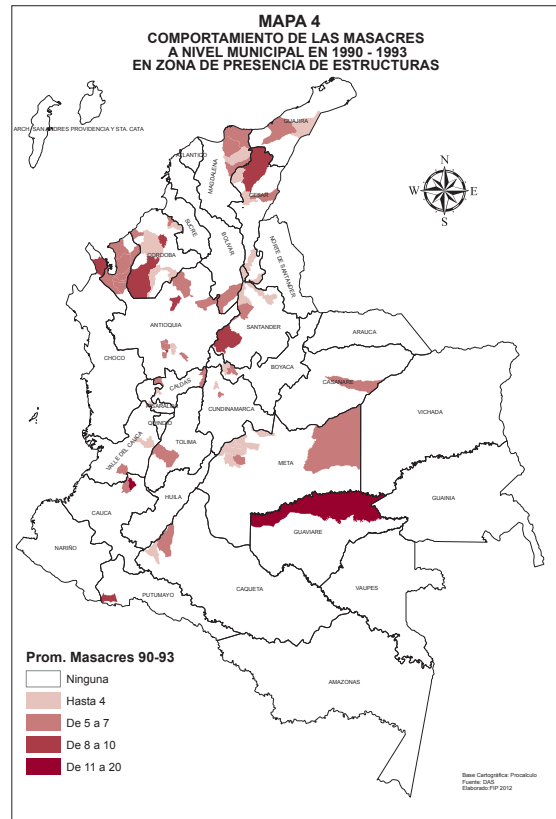
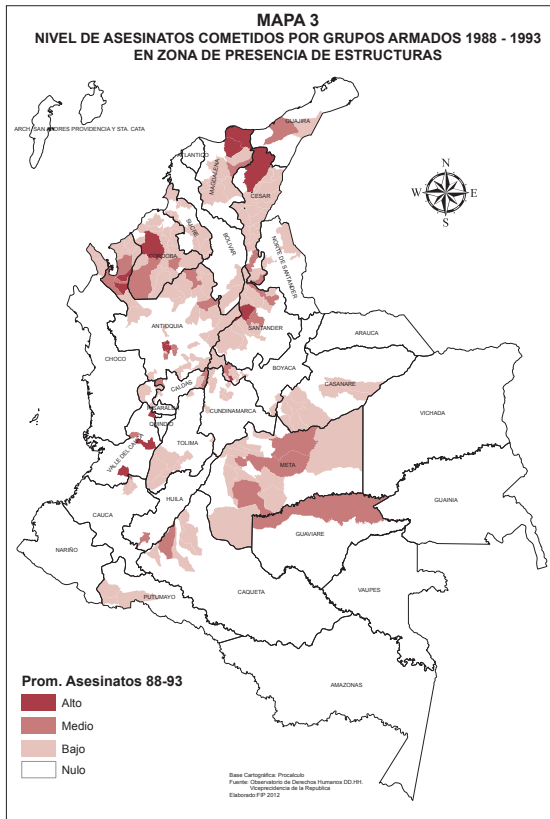
Con posterioridad a la muerte de Pablo Escobar ocurrida en 1993, las organizaciones armadas que habían crecido de la mano del narcotráfico en la década anterior, experimentaron un nuevo impulso gracias a los recursos aportados por otros narcotraficantes que las llevaron a registrar su mayor expansión territorial y niveles de violencia muy elevados.

MAPAS 1-2

CAMBIO EN LA TERRITORIALIDAD DE LAS AUTODEFENSAS



⁹ Se utiliza la expresión asesinatos para señalar que son las muertes cometidas por actores organizados de violencia. Los datos utilizados son del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República.



2. Las autodefensas buscan reconocimiento político y registran su más fuerte expansión territorial (1994-2002)

En 1994, cuando se realiza la “Primera cumbre de las Autodefensas de Colombia”, se esboza una estrategia encaminada a lograr un espacio en la negociación con el Estado y un estatus que garantizara, a futuro, su reconocimiento como actor del conflicto armado (Cubides, 1998, 1999, 2005). A partir de este momento las autodefensas multiplicaron su capacidad ofensiva y los narcotraficantes, al menos en las dimensiones más públicas, adquirieron cierta legitimidad (Camacho, 2011).

En la relación indisoluble entre autodefensas y narcotraficantes, las primeras obtuvieron los recursos necesarios para financiar su expansión a varias regiones, mientras que los narcotraficantes pretendieron adquirir un estatus político frente al Estado, apelando a un discurso “populista” en relación con las víctimas y a la necesidad de proteger al propietario extorsionado, secuestrado, asesinado por la guerrilla, prueba evidente de que el Estado colombiano era incapaz de cumplir la función constitucional básica de garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos (Palacios, 2012).

El desmonte de los carteles de Medellín y Cali creó un vacío de poder que tuvo el efecto de fraccionar la cadena del negocio de las drogas que se expresó, por una parte, en la entrada y posterior dominio de los carteles mexicanos de la etapa de comercialización al por mayor y al detal en los Estados Unidos y, por otra parte, el ingreso creciente de grupos armados encargados de la seguridad de los escenarios de producción en el nivel local y del transporte en el ámbito nacional (Tickner et. al. 2011). De aquí que la expansión de las autodefensas se explique principalmente por la búsqueda de mayores rentas provenientes del narcotráfico, lo cual coincidió con el escalamiento del conflicto armado, pero este último no es el factor determinante.

A diferencia del período anterior, en el que el narcotráfico sometía a las autodefensas, en este, cuando la característica es la desaparición de los carteles colombianos, que paulatinamente fueron reemplazados por los llamados carteles mexicanos, son las autodefensas las que sometieron a los narcotraficantes. Golpeado el cartel de Medellín, al que habían estado atadas las autodefensas, éstas buscaron capitalizar el narcotráfico bajo el liderazgo de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso (Escobedo, 2011).

Las ACCU comenzaron a registrar una expansión significativa con el apoyo de desmovilizados del EPL, asedia-

dos por las FARC y la disidencia de Francisco Caraballo. La avanzada liderada por las ACCU se expresó en 1994 en el norte de Urabá. Al año siguiente, se produjo la entrada al eje bananero y en 1996 la expansión al Atrato, occidente y oriente antioqueño y Nudo de Paramillo, junto con el inicio de acciones en Sucre, Bolívar y Cesar.

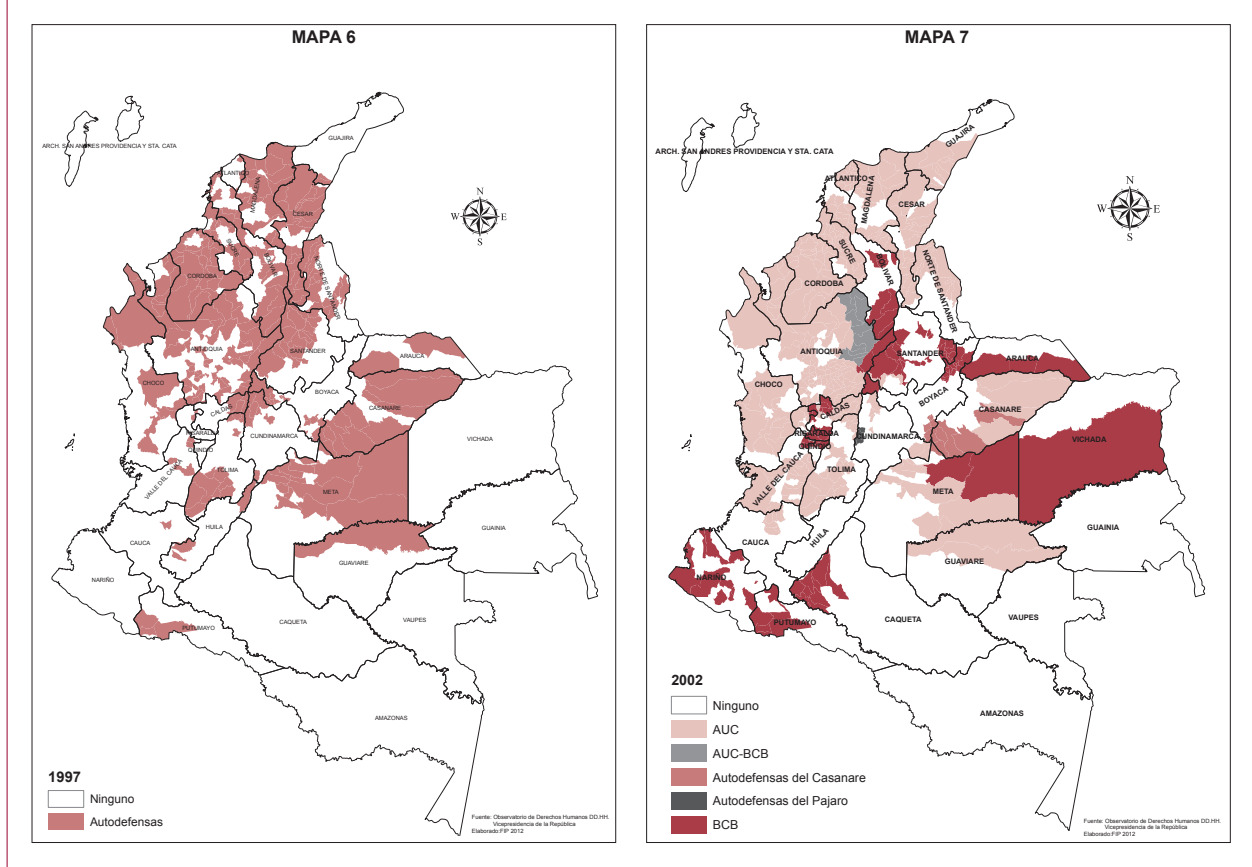
Entre tanto, los grupos del Magdalena Medio, pese a haber protagonizado actos de dejación de armas en el periodo anterior, no se desactivaron por completo. Optaron por frenar su expansión –excepto en el sur del Cesar–, no llamaron la atención con actos de violencia y, ante todo, defendieron territorios de vital importancia para el narcotráfico. En la Sierra Nevada de Santa Marta, Hernán Giraldo garantizó su continuidad, que en el pasado perteneció al cartel de Medellín. Así mismo, hay continuidad en Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo, con las estructuras conformadas por Rodríguez Gacha pero más debilitadas y fragmentadas que en los años ochenta (Salazar, 1999).

Con excepción de algunos casos, como el de Urabá, considerando el conjunto nacional se registró una disminución en el accionar ofensivo, si se mide a partir de homicidios. Las masacres también bajaron pero mantuvieron niveles altos, principalmente, por lo ocurrido en Urabá como consecuencia de la confrontación entre las autodefensas y las FARC y la ofensiva de las primeras contra organizaciones sociales y movimientos políticos.

En abril de 1997, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, las del Magdalena Medio y las de los Llanos Orientales se unieron para conformar las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En la práctica se trató de una federación de grupos regionales que se presentaron bajo la bandera de las AUC para parecer, de manera artificiosa, una organización con mando unificado, un plan nacional, coordinación regional de las operaciones militares y una agenda programática.

Como se observa al comparar los mapas 6 y 7 (página siguiente), la presencia de las autodefensas se incrementó al pasar de aproximadamente 279 municipios en 1997 a 455 en 2002, antes del inicio de su desmovilización. El avance de las autodefensas registrado en este periodo se expresa, por una parte, en que la guerrilla registró considerables pérdidas territoriales y, por otra, en que los alzados en armas tuvieron que concentrar mayores esfuerzos para evitar su expulsión.

No obstante que la territorialidad de las autodefensas muestra cambios muy considerables en este periodo, hay continuidad con el dispositivo de los años ochenta en la estrecha relación que se establece con el narcotráfico, tal como lo evidenciaron los casos del Magdalena Medio, Cór-



doxa y Urabá y en el sur oriente en Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo.

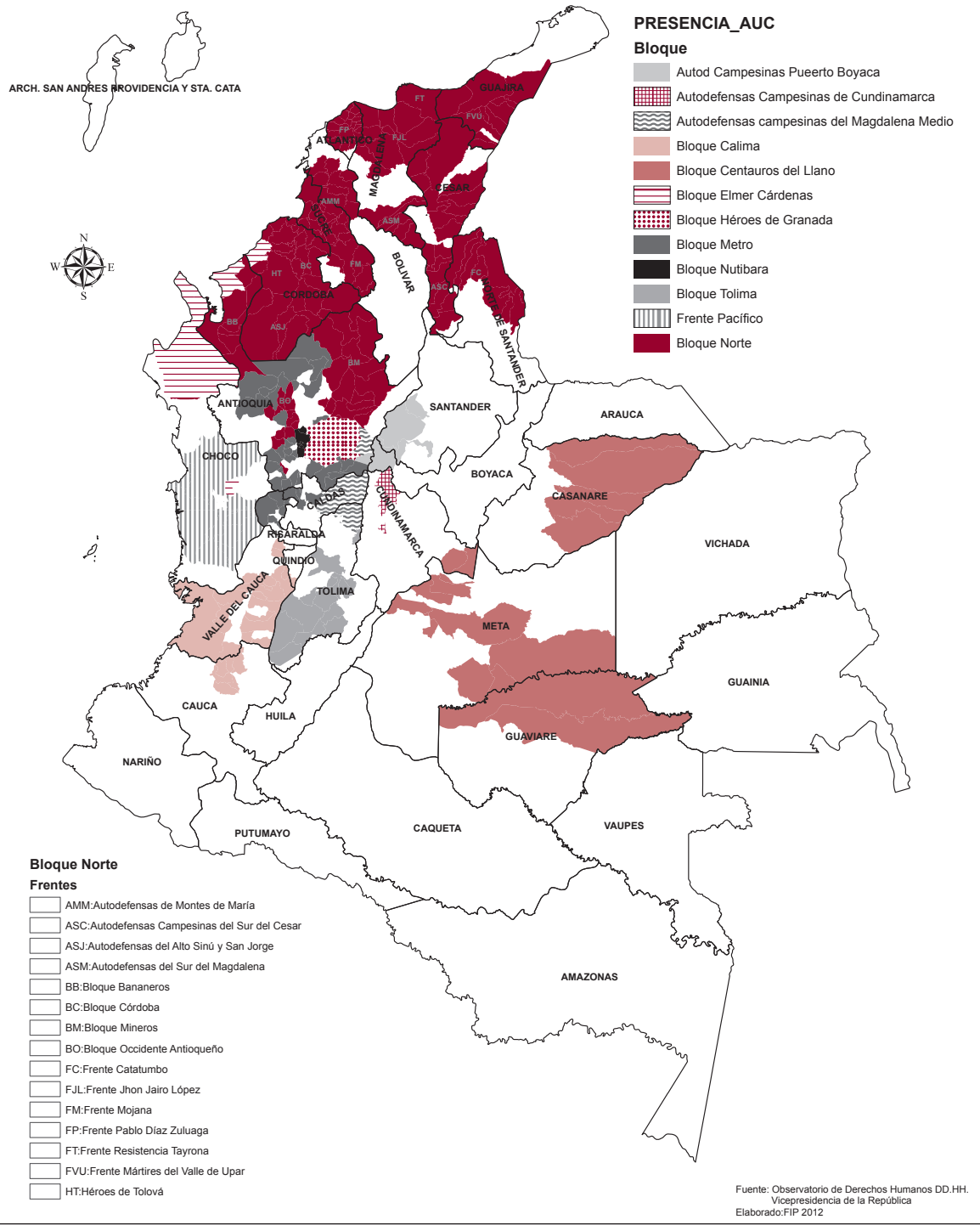
Tal como se aprecia en el mapa 8 (página siguiente), las AUC se dividieron en Bloques, entre los que se destacan los denominados Norte, Centauros, Tolima, Calima, Élder Cárdenas, Metro, Cacique Nutibara, así como las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, las Autodefensas Campesinas de Cundinamarca y las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá. Cubrió así parte de los departamentos de la Costa Atlántica, es decir La Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba; parte del departamento de Norte de Santander, principalmente el Catatumbo y Cúcuta; parte de los departamentos de Casanare, Meta y Guaviare en el oriente del país; el sur del Tolima; el norte del Cauca; parte del Valle, y de Caldas y Risaralda, en el eje Cafetero. También incluyeron parte del centro y el norte del Chocó; buena parte de Antioquia, y en particular Urabá, Occidente, Norte, Bajo Cauca, Nordeste, Oriente, Suroriente, y Medellín y su zona Metropolitana. Así mismo, la región del Magdalena Medio, principalmente en parte de Santander, Cundinamarca, Boyacá, Caldas y Antioquia. Entre sus jefes se encuentran los hermanos Carlos y Vicente Castaño, Die-

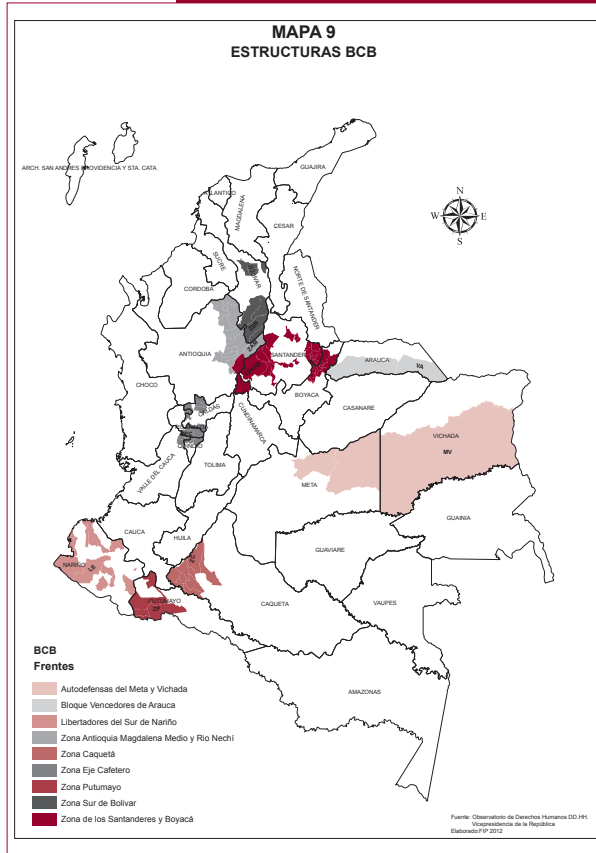
go Murillo Bejarano, Salvatore Mancuso, Jorge Cuarenta y otros más.

El Bloque Central Bolívar (BCB) surgió años después y oficialmente su sigla se conoció solamente hasta el año 2000 (Arias y Prieto, 2011). El BCB, que articuló un conjunto de estructuras que no se plegaron a las AUC, se dividió por zonas y bloques. Como se observa en el mapa 9 (página 14), las estructuras se asentaron en el sur de Bolívar, el Nordeste de Antioquia y el Bajo Cauca; el Magdalena Medio en parte de Antioquia, Santander y Boyacá; parte de Santander; Arauca; parte de Meta y Vichada; suroccidente de Caquetá; occidente de Putumayo; buena parte de Nariño; y parte del eje cafetero en porciones de Quindío, Risaralda y Caldas. Sus principales jefes fueron Rodrigo Pérez Alzate, “Julián Bolívar”, su hermano Guillermo Pérez Álzate, “Pablo Sevillano” y junto a ellos, Carlos Mario Jiménez conocido con los alias de “Macaco” o “Javier Montañez”.

Adicionalmente, hubo dos estructuras que no se alinearon a ninguna de las anteriores, las llamadas Autodefensas Campesinas del Casanare bajo el mando de “Martín Llanos”, en el Casanare, y las llamadas autodefensas de El Pájaro, en el occidente de Cundinamarca.

MAPA 8 ESTRUCTURAS AUC





La territorialidad de las autodefensas evidencia que los intereses de estos grupos desbordan la pretendida dimensión contrainsurgente. En efecto, de los 531 municipios con presencia de estos grupos entre 1997 y 2002, solo en 100 –que representan el 18%– hay una correspondencia con una elevada actividad guerrillera que represente una grave amenaza. Y lo que es más dicente, en 279 municipios –que representan el 52% de los que tienen presencia de las autodefensas– la amenaza guerrillera es baja y en los 152 que representan el 30% restante, no hay presencia activa de las guerrillas.

Como se aprecia en el mapa 10 (página siguiente), la oferta de protección de las autodefensas no corresponde con la demanda de seguridad, por cuanto la presencia de este actor se establece principalmente en función de los intereses del narcotráfico. Este hecho se corrobora al descubrir que en el 52% de los escenarios donde la guerrilla representa una elevada amenaza y las autodefensas ejercen influencia, los cultivos de coca están presentes. Es importante subrayar que entre los factores que explican la presencia de las autodefensas, el narcotráfico es el principal. Si bien la relación entre la presencia de las autodefensas y los cultivos de coca es muy significativa, el dispositivo de las autodefensas los sobrepasa, pues abarca igualmente

corredores entre estos y los puntos de embarque, pasando por los centros de procesamiento.

En el caso de las AUC, en donde a pesar de que su presencia en el territorio guarda de todas maneras una relación muy importante con los cultivos, corresponde con corredores y los puntos de embarque en el norte del país. En lo concerniente al BCB, hay una relación estrecha entre su presencia y los cultivos, a pesar de que en este caso la relación también es estrecha con centros de procesamiento y corredores que quedan muy cerca de los primeros, como ocurre en el caso de Nariño (Escobedo, 2011).

El cruce entre la territorialidad de las autodefensas con la presencia activa de las guerrillas y los cultivos de coca muestra que en el oriente, en Meta, Guaviare y buena parte de Caquetá, hay una clara correspondencia entre cultivos y la guerrilla, mientras que las autodefensas se sitúan en el entorno de los mismos. En el sur de Córdoba, Antioquia (norte, bajo Cauca y nordeste), Sur de Bolívar y Catatumbo, hay una asociación entre la presencia guerrillera y las autodefensas. En el sur occidente de Caquetá, Putumayo, Nariño y Sur de Bolívar, hay una correspondencia muy marcada entre las autodefensas, la guerrilla y los cultivos.

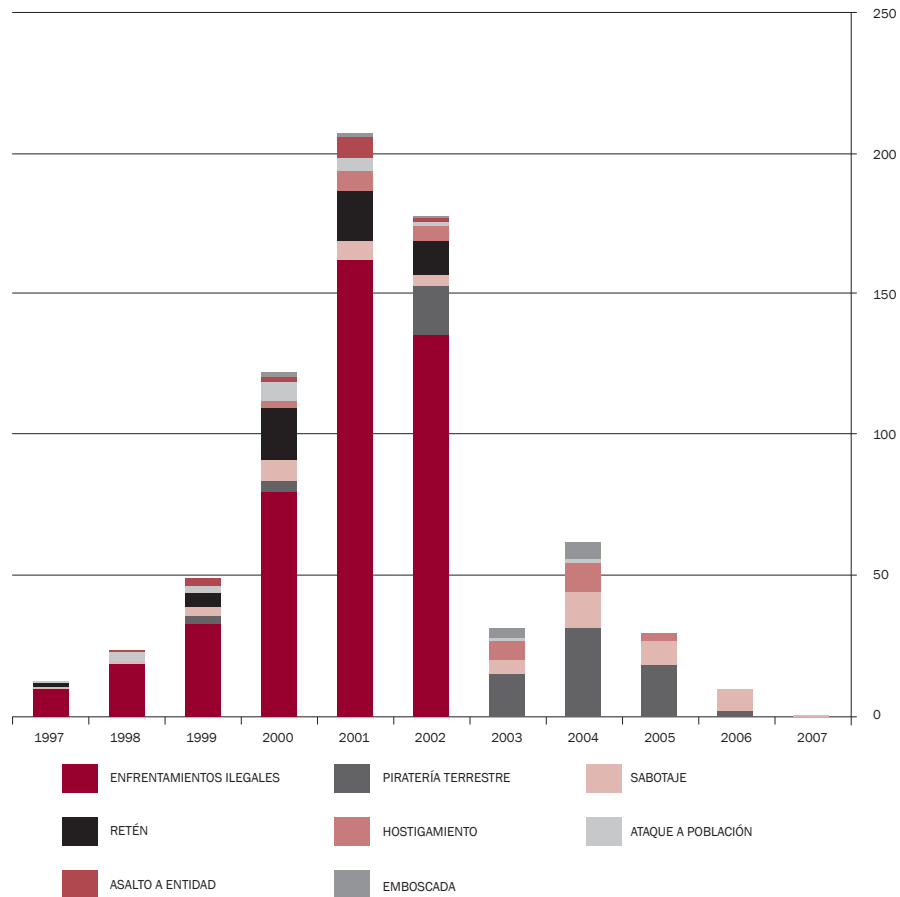
Por otra parte, como se aprecia en el gráfico 2 (página siguiente), las autodefensas se enfrentaron directamente con las guerrillas entre 1997 y 2002, lapso en el cual, adicionalmente, experimentaron su más fuerte expansión. Si bien las autodefensas buscaron su reconocimiento como actor contrainsurgente a través de la realización, en diferentes zonas del país, de enfrentamientos con la guerrilla, estas acciones tienen un patrón geográfico que corresponde con las áreas estratégicas para el narcotráfico, tanto en el norte del país, como en el oriente, suroriente y suroccidente, tal como se muestra en el mapa 11 (página 16).

Los enfrentamientos que se registran alrededor de los cultivos de coca y por corredores y rutas de narcotráfico, también tienen el efecto de golpear a la guerrilla. De hecho, de los 201 municipios donde se registran enfrentamientos, en 100 hay cultivos de coca y entre estos, en 47 la guerrilla registra un elevado accionar armado. Así mismo, es importante destacar que en 73 municipios que representan el 36% de los escenarios donde se llevan a cabo los enfrentamientos, la guerrilla ostenta un elevado poderío militar, pero en el trasfondo de la disputa armada no dejan de aparecer los cultivos de coca y las posiciones de alto valor para el narcotráfico.

En el caso del debilitamiento del ELN, la actuación de las autodefensas es el factor decisivo. La acción de las autodefensas poco a poco fue debilitando al grupo guerrillero en la franja del territorio que abarca desde el Bajo Cauca antioque-

GRÁFICO 2

EVOLUCIÓN DEL ACCIONAR ARMADO DE LOS GRUPOS DE AUTODEFENSA (1997-2007)



Fuente: Observatorio DD.HH. y DIH de la Vicepresidencia de la República.

ño hasta Norte de Santander, así como en Barrancabermeja, Cúcuta y Medellín. De esta forma, las autodefensas lograron penetrar zonas de alto valor estratégico para el ELN y golpear buena parte de sus estructuras, no obstante que la motivación principal haya sido el narcotráfico¹⁰.

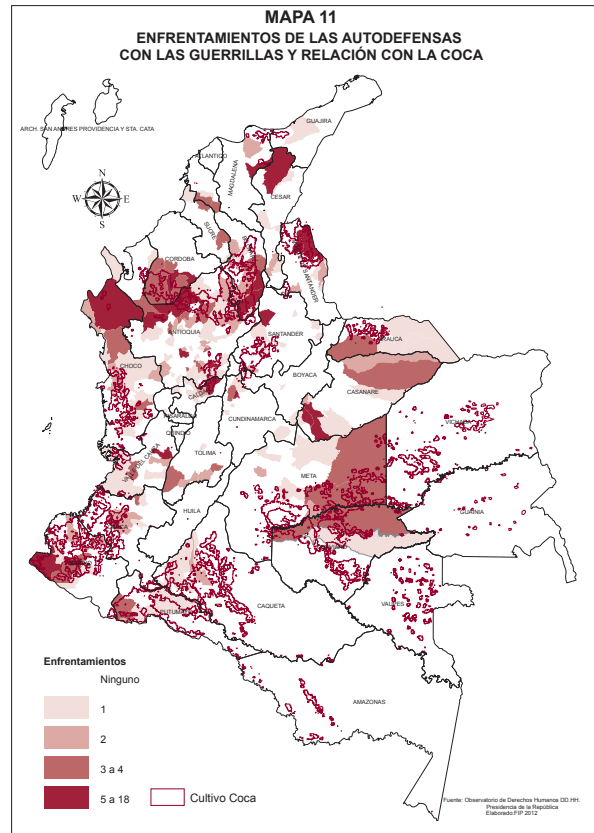
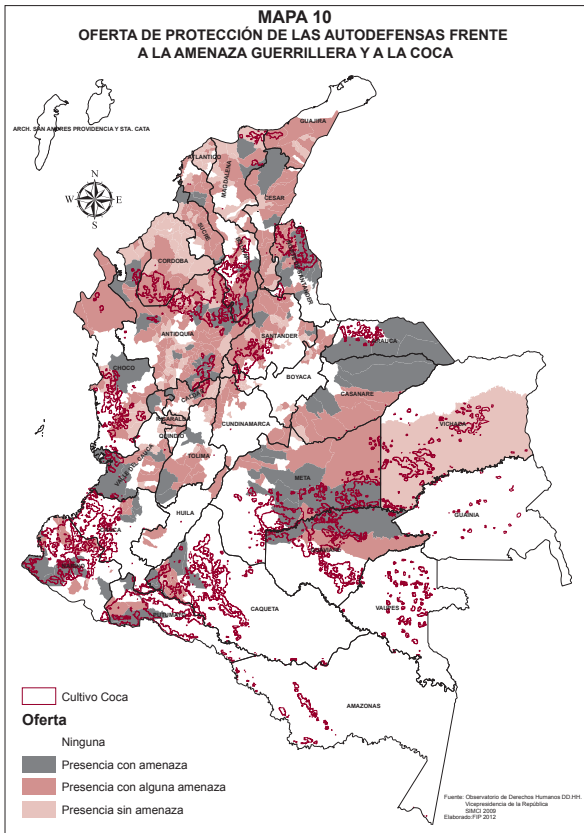
En los enfrentamientos directos, que en este periodo dejan un balance favorable a la guerrilla, las autodefensas demostraron sus enormes deficiencias en el campo táctico y de ahí la imposibilidad de afectar particularmente a las FARC¹¹. La relación de bajas de la guerrilla por bajas de las

autodefensas en los enfrentamientos sostenidos entre los dos grupos es de 0.5, lo que significa que por un guerrillero muerto cayeron dos miembros de las autodefensas. De aquí que la acción de estos grupos se dirija principalmente contra los civiles que representan el 90% de las víctimas (Granada y Sánchez, 2009).

El crecimiento de las autodefensas en los escenarios donde el narcotráfico se expandía al mismo tiempo que las FARC aumentaban su presencia, tuvo un impacto significativo en los niveles de violencia por las disputas que se des-

¹⁰ Existe una relación entre la decadencia del ELN y el crecimiento en sus zonas de influencia de los cultivos de coca, paralelamente con la penetración de los grupos de autodefensa. En el caso del Bajo Cauca antioqueño, el punto de quiebre se dio en octubre de 1998, cuando el bloque Mineros asesinó al alcalde y a la personera de Anorí. Desde entonces, el crecimiento de los cultivos fue vertiginoso y Anorí se convirtió en el municipio con el mayor número de cultivos en Antioquia. En este contexto, la decisión del ELN de sustraerse de la principal *economía de guerra* de la región, dejó al grupo guerrillero sin posibilidad de sostenerse y en consecuencia, por fuera del escenario de la confrontación (Fundación Ideas para la Paz, 2005).

¹¹ En el sur de Bolívar, las FARC y ELN, que habían logrado el dominio exclusivo de esta región, se vieron abocados, con la expansión de los cultivos de coca en los años noventa, a la confrontación con los grupos de autodefensa por el dominio del territorio y los recursos de la economía ilegal. El avance de las AUC llevó a Carlos Castaño a anunciar que para finales de 1998 "colgaría su hamaca en la parte más alta de la Serranía de San Lucas". Sin embargo, entre más avanzaban las autodefensas la superioridad táctica de las guerrillas se expresaba en derrotas consecutivas que las obligaron a retroceder.



ataron en torno a los cultivos, los corredores y las zonas de procesamiento¹². La elevada intensidad de la violencia se produce por las disputas entre autodefensas y guerrillas, lo cual se corrobora en los mapas 12, 13 y 14 (página siguiente), mostrando una muy significativa correspondencia entre los municipios en donde las autodefensas avanzan y los altos índices de homicidios que allí se registran, por la ocurrencia de masacres y/o asesinatos¹³.

Particularmente, el número de víctimas de masacres que registra su pico más elevado en 2001, se explica por

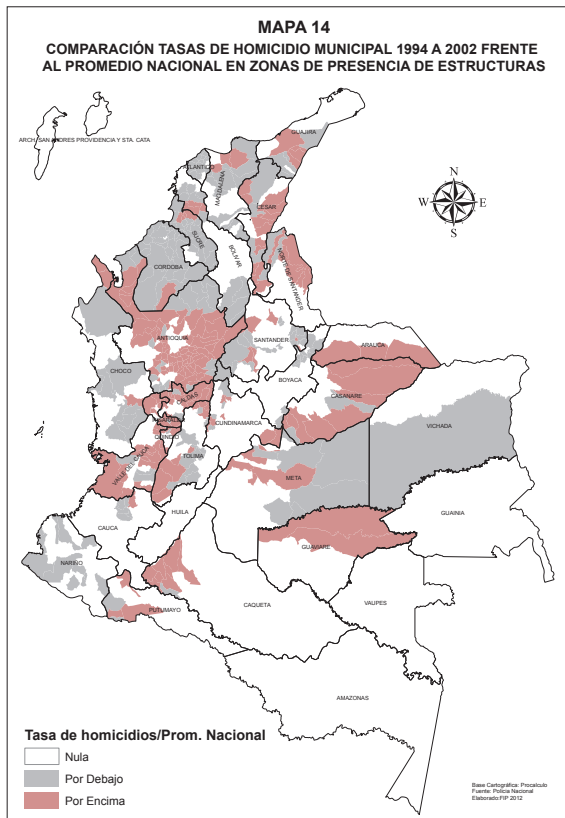
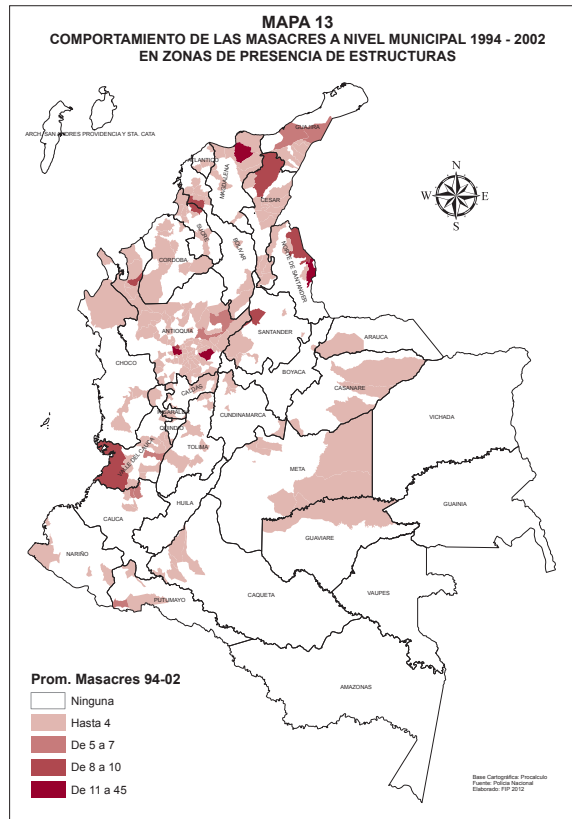
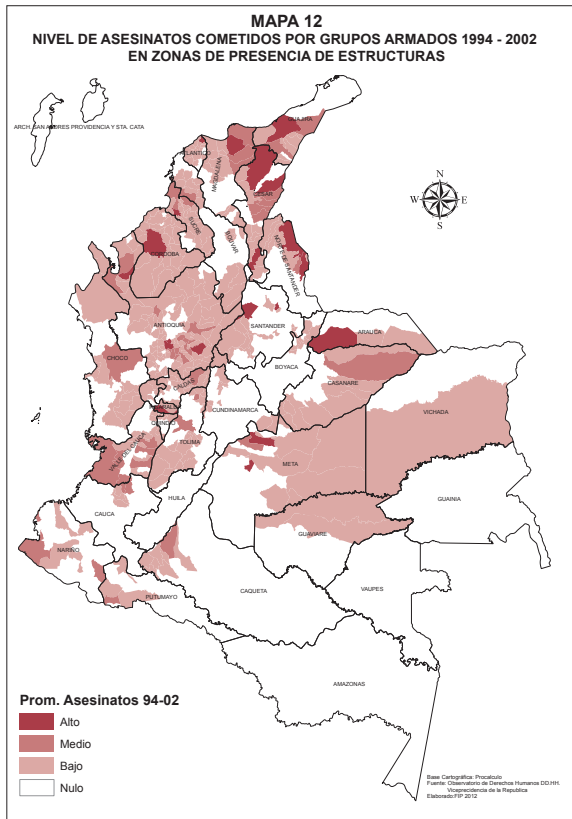
la lógica de expansión de los grupos de autodefensa, inscrita en el propósito de consolidar una franja del territorio que dividiera el norte del centro del país y que, a su vez, permitiera controlar los escenarios de producción de coca localizados entre Urabá, Bajo Cauca, sur de Bolívar y Catatumbo¹⁴. Una vez logrado este objetivo, las autodefensas se propusieron incursionar en las zonas de retaguardia de las FARC, ubicadas en el sur y oriente del país.

En la disputa por el control territorial, las guerrillas terminan recurriendo a las prácticas de terror de las autode-

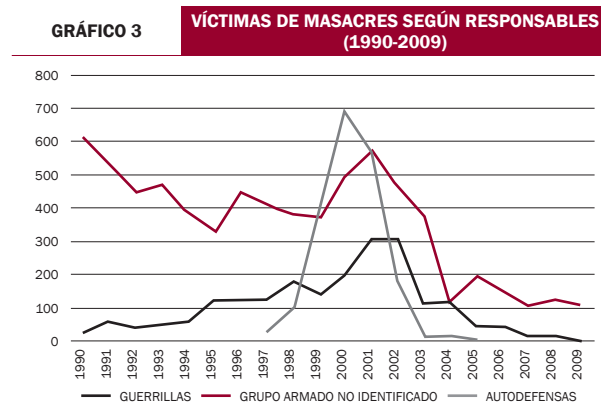
¹² No se puede excluir que la elevada intensidad que alcanza la violencia se explique por factores asociados a la lucha contra la extorsión y el secuestro realizados por las guerrillas. De hecho, a partir de la cartografía elaborada por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, se pudo establecer que 15.968 de los 23.666 secuestros registrados en el país entre 1996 y 2007, es decir el 67%, ocurrieron en 150 municipios, en donde la participación de la guerrilla en la ejecución de los plagios es mayoritaria, al mismo tiempo que allí se concentró el 56% de las víctimas de asesinatos y masacres cuya responsabilidad recae en los grupos paramilitares (Echandía, 2009).

¹³ Cabe señalar que aun cuando en la mayoría de los asesinatos cometidos por actores organizados no se conoce el autor, la correspondencia entre la intensidad con que se producen las muertes y los momentos en que los grupos de autodefensa adquieren mayor protagonismo, evidencia la actuación preponderante de este actor.

¹⁴ A partir de esta franja, el Bloque Norte de las AUC manejó, hacia el norte, los corredores a la costa Atlántica, Venezuela y Panamá, y en particular hacia el Chocó, el Urabá, Sucre, Bolívar, Atlántico, la Sierra Nevada de Santa Marta, así como la Serranía del Perijá y los límites entre Colombia y Venezuela, desde La Guajira hasta Norte de Santander, pasando por el Cesar. En esta parte debilitaron las estructuras del ELN y en particular en el Sur de Bolívar, Norte de Santander, y en los departamentos de la Costa Caribe. Así mismo se enfrentaron a las FARC, agrupación que no obstante logró resistir y mantuvo más fortaleza que su similar, amparada en el narcotráfico (Escobedo, 2011).



fensas. De aquí que la guerrilla, particularmente las FARC, contribuya a incrementar las masacres, siguiendo a los grupos de autodefensa, que son, los principales responsables de las muertes registradas entre 1999 y 2001, tal como se observa en el gráfico 3.



Fuente: Policía Nacional.

Las autodefensas si bien actuaron en zonas estratégicas para el narcotráfico, relacionadas con cultivos, centros de procesamiento, corredores y zonas de embarque, igualmente presionaron en otros escenarios. Actuaron en cascos urbanos de importancia entre los que Medellín, Barranquilla, Cúcuta y Barrancabermeja son tan solo unos ejemplos. En lo esencial, las autodefensas presionaron en muchas cabeceras urbanas con el fin de limitar la capacidad de las guerrillas para ejercer presión militar y/o efectuar secuestros y extorsiones. Igualmente actuaron en zonas planas, o en donde había economías dinámicas, asediadas por las guerrillas, como en el oriente antioqueño o el entorno de Bogotá. Actuaron así mismo en la zona bananera del Magdalena y en amplias zonas ganaderas de Magdalena y Cesar (Escobedo, 2011).

Mediante el recurso a la violencia, las autodefensas lograron que en muchos escenarios regionales del país se instaurara una nueva hegemonía social en beneficio tanto de las clases dominantes tradicionales, como de las llamadas clases emergentes. Los desplazamientos masivos de campesinos, el terror contra los líderes de organizaciones sociales y populares hicieron posible la concentración, sin precedente, de las tierras.

La tendencia descendente de las masacres, a partir de 2002, se relaciona con la conducta de los grupos de autodefensa que, tras lograr su consolidación en amplios territorios, en el marco de las desmovilizaciones llevadas a cabo durante la primera administración Uribe Vélez, dejan de recurrir a esta práctica. En estos escenarios, la ausencia o el descenso en el registro de masacres no indican ne-

cesariamente que la situación sea mejor o evolucione en buen sentido, por el contrario, puede indicar que existe una hegemonía de facto de un actor armado.

Por último, es importante señalar que entre 2000 y 2003 se produjo una importante ampliación de la territorialidad de los grupos de autodefensa en razón a que un número significativo de narcotraficantes, mediante la compra de “franquicias”, ingresa a las estructuras existentes con el propósito de incrementar el control sobre las regiones donde se concentraba el negocio. También buscaban garantizar una silla en el proceso de negociación iniciado a finales de 2002. Entre otros narcotraficantes, los alias “Gordo Lindo”, “Don Berna”, “Cuco Vanoy”, “Macaco”, “Los Mellizos Mejía”, “Juan Carlos Sierra”, y “Miguel Arroyave” fueron admitidos como “comandantes” de las autodefensas.

3. Tras su desmovilización las autodefensas son relevadas por bandas en escenarios donde persiste el narcotráfico (2003-2012)

El tercer periodo, entre 2003 y 2012, se divide en dos sub periodos. El primero, entre 2003 y 2006, corresponde a la desmovilización de las autodefensas que tuvo un propósito táctico por cuanto las estructuras más poderosas se dismantelan parcialmente. En el segundo sub periodo, a partir de 2005, en parte traslapado con el anterior, las “bandas criminales” (Bacrim, en lenguaje policial) relevan a las autodefensas en zonas estratégicas para el narcotráfico.

A partir del proceso de desmovilización entre 2003 y 2006, el narcotráfico entró en su etapa de mayor fragmentación. Las desmovilizaciones tuvieron una incidencia determinante en este proceso. Los jefes de las autodefensas vendieron o cedieron su participación en el negocio del narcotráfico a facciones, pero al carecer de una instancia de regulación, que en el pasado desempeñaban las AUC, se ven abocadas a la confrontación.

Las desmovilizaciones se iniciaron el 25 de noviembre de 2003, en Medellín, con el Bloque Cacique Nutibara y terminaron el 15 de agosto de 2006, con el Bloque Elmer Cárdenas. En 38 actos se desmovilizaron 31.689 de los integrantes de los grupos de autodefensa. Cabe señalar que las organizaciones con mayor número de desmovilizados fueron el Bloque Central Bolívar con 6.348, el Bloque Norte con 4.760, el Bloque Mineros con 2.780, el Bloque Héroes de Granada con 2.033 y el Bloque Elmer Cárdenas con 1.538. A los desmovilizados hay que sumarles otros 3.554 individuales entre 2003 y 2006, 1.579 muertes en

combate en el mismo período y 12.100 más que fueron capturados.

Como ya se ha señalado, las autodefensas, tras lograr su consolidación en amplios territorios en el marco de las desmovilizaciones llevadas a cabo durante la primera administración Uribe, dejan de recurrir a las masacres y también reducen los homicidios. El cambio en la dinámica de los homicidios también se relaciona con lo acontecido en la confrontación armada, particularmente, como resultado de la ofensiva de las Fuerzas Militares contra la guerrilla y con la recuperación del territorio y la población que permanecían bajo la influencia de estructuras armadas que no tuvieron opción distinta a la de replegarse a las zonas rurales, lejos de los escenarios más poblados y de la posibilidad de afectarlos.

No obstante que los indicadores de violencia bajaban a nivel nacional, en algunos escenarios los niveles se mantuvieron elevados por el accionar de organizaciones de la criminalidad organizada y también por las violaciones a la tregua pactada por las autodefensas con el gobierno, en diciembre de 2002¹⁵.

Un análisis cuidadoso de las desmovilizaciones llevadas a cabo entre noviembre de 2003 y agosto de 2005, en las cuales algo más de 10.000 hombres entregaron alrededor de 5.500 armas, sugiere que la territorialidad de estos grupos no corresponde con los principales polos de producción de coca y tampoco era factible que la guerrilla pudiera incursionar para retomar el control de estas zonas, debido a que se encontraban resguardadas por estructuras más poderosas que posteriormente se desmovilizaron de manera parcial¹⁶. Entre las estructuras desmovilizadas entre septiembre de 2005 y agosto de 2006, que corresponden a las más numerosas, se encuentran el Bloque Norte, Cen-

¹⁵ En el Quinto Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, MAPP/OEA, del 5 de Octubre de 2005, se hace mención a violaciones al cese de hostilidades en el noroccidente de los departamentos de Sucre y Bolívar; en el Oriente Antioqueño; en el piedemonte sur y al suroriente de la Sierra Nevada de Santa Marta; en el Sur del Cesar y en Barrancabermeja.

¹⁶ En 2003 y 2004 hubo muy pocas desmovilizaciones, pero a pesar de que hubo reservas, fueron significativas por el perfil de algunos de sus comandantes, situación que abrió el debate en torno a la persistencia o no de la actividad del narcotráfico (Escobedo, 2009). Se destacaron la del Bloque Nutibara que actuaba en Medellín y el Valle de Aburrá, ocurrida en diciembre de 2003, acto en el que se desmovilizó Diego Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, muy ligado con el narcotráfico en el pasado, con la *Oficina de Envigado* y también relacionado con el Bloque Calima, que se desmovilizó en el departamento del Valle en diciembre. Igualmente se produjo la del Bloque Bananeros, en el Urabá Antioqueño, en Noviembre de 2004, que como el Bloque Calima, actuaba en una zona estratégica para el narcotráfico. No obstante, en el Urabá persistió el Bloque Elmer Cárdenas y en el Valle, el Bloque Pacífico, por lo que la desmovilización de los Bloques Calima y Urabá no se constituyó en garantía respecto del cese del narcotráfico en estas regiones. En diciembre también ocurrió la del Bloque Catatumbo en Norte de Santander y al mismo tiempo entregó su arma Salvatore Mancuso, que aparecía como su comandante. A finales de 2004 hubo otras desmovilizaciones simbólicas por la tradición de las organizaciones involucradas y en particular, las de las Autodefensas del Sur del Magdalena y la del Bloque de Cundinamarca, bajo el mando de El Águila. En enero de 2005 lo hicieron el Bloque Suroeste Antioqueño y el Bloque Córdoba de las AUC. En febrero del mismo año, lo hizo el Bloque La Mojana, en Sucre. En junio se desmovilizó el Bloque Héroes de Tolová en el sur de Córdoba. En julio, el Bloque Héroes de los Montes de María, en Sucre y Bolívar y el Bloque Libertadores del Sur en Nariño. En agosto, el Bloque Héroes de Granada en Antioquia y el Bloque Pacífico en el Valle y en el Chocó. Las Autodefensas de Meta y Vichada también entregaron las armas.

tral Bolívar, Minero, Elmer Cárdenas, Vencedores de Arauca, dos facciones del Bloque Centauros y las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, que se localizan en zonas con cultivos de coca, corredores y salidas de droga¹⁷.

Bajo esta perspectiva, las desmovilizaciones tuvieron un propósito táctico por cuanto no llevaron a la desactivación definitiva de las estructuras armadas. A partir de 2005 comienza a ser evidente la persistencia de grupos armados que mantienen una fuerte relación con el narcotráfico¹⁸. Así mismo, es importante señalar que la guerrilla no copó las áreas donde hubo desmovilización de las autodefensas como en un principio se pensó que ocurriría¹⁹.

Las bandas llevan a cabo homicidios, pero en niveles moderados y principalmente en el marco de disputas al interior del narcotráfico. Las regiones donde van adquiriendo visibilidad son: La Guajira, norte y sur del Cesar, Córdoba, Magdalena, sur de Bolívar, Norte de Santander, Urabá y el occidente de Antioquia, Vichada, Meta, Casanare, Arauca, Nariño, Tolima, Putumayo, Caquetá, Chocó y Caldas²⁰.

Al principio algunas bandas estuvieron bajo el mando de personas que se apartaron del proceso de negociación como Vicente Castaño, Pedro Oliverio Guerrero Castillo, “Cuchillo”, o “Los Mellizos” Mejía Múnera. Especial significado tiene el asesinato de Vicente Castaño que al parecer ocurrió en una finca ubicada en Nechí y habría sido determinado por sectores relacionados con la *Oficina de Envigado*, que a su turno tenían intereses alrededor del narcotráfico en el Bajo Cauca antioqueño. De otra parte, “Cuchillo” estuvo al mando de “El Ejército Revolucionario Popular Antiterro-

rista de Colombia” (ERPAC) hasta finales de 2010, cuando murió en desarrollo de una operación de la Policía, en jurisdicción de Mapiripán en el Meta. En lo concerniente al grupo liderado por los hermanos Mejía Múnera, registró un crecimiento muy rápido hasta mediados de 2008, cuando Víctor Manuel es dado de baja y Miguel Ángel capturado por la Policía. “Los Mellizos” lograron ingresar al proceso de negociación, tras adquirir la franquicia del bloque *Vencedores de Arauca*. Luego de apartarse del proceso crearon una estructura armada en la Sierra Nevada que, junto a ex integrantes de las autodefensas de Sucre, Bolívar, Córdoba y Antioquia, se propusieron controlar las rutas del narcotráfico desde Nariño hasta La Guajira rumbo a Centro América, así como desde los Llanos hasta Norte de Santander rumbo a Venezuela.

Los Machos y *Los Rastrojos*, que habían nacido en 2002, buscaron espacio en las negociaciones, pero ante la negativa del gobierno persistieron como agrupaciones armadas al servicio de facciones del cartel del Norte del Valle. Con la captura de Diego Montoya hacia finales de 2007, se produce una disputa entre los mandos medios de *Los Machos* por lograr el predominio dentro del grupo. Las contradicciones al interior de esta organización facilitaron el camino a *Los Rastrojos*, que se extendieron rápidamente a zonas de influencia de las autodefensas desmovilizadas y sellan alianzas con estructuras de la guerrilla. Cabe anotar que la *Organización Nueva Generación* (ONG) integrada por personal que no se desmovilizó con el Bloque Libertadores del Sur, fue desbancada por *Los Rastrojos* que desde

¹⁷ En septiembre de 2005 se desmovilizaron el Bloque Noroccidente antioqueño y una facción leal a Arroyave del Bloque Centauros, así como el frente Vichada del Bloque Central Bolívar. En diciembre lo hicieron varias estructuras del Bloque Central Bolívar y en particular, los Bloques Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio; también lo hizo el mismo mes el Bloque Vencedores de Arauca que no estaba orgánicamente integrado al BCB, pero que negoció en asocio con el mismo. En 2006, la mayoría de las desmovilizaciones se produjo en el primer trimestre del año. El turno le correspondió al Bloque Norte, en el Cesar, La Guajira, Magdalena y Atlántico; también se desmovilizó el frente Julio Peinado en el sur del Cesar; el Bloque Resistencia Tayrona, en Magdalena, el Frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte en el Catatumbo, Norte de Santander, el Bloque Mineros en el bajo Cauca Antioqueño, las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá y las Autodefensas del Magdalena Medio. Así mismo se desmovilizaron varios frentes del Bloque Central Bolívar en el sur del departamento de Bolívar. En abril de 2006 se desmovilizaron los frentes Héroes del Llano y Héroes del Guaviare del Bloque Centauros, en Meta y Guaviare, y el Bloque Elmer Cárdenas en el Urabá chochoano y antioqueño (Escobedo, 2009).

¹⁸ Es más o menos a finales de 2005 y principios de 2006 que empieza a hablarse de las organizaciones que posteriormente se denominaron bandas criminales. Ver: Sexto Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, MAPP/OEA, del 16 de febrero de 2006. En el séptimo informe aparecido en agosto de 2006, coincidiendo prácticamente con el final de las desmovilizaciones, la MAPP/OEA identificó varias zonas afectadas por la presencia de actores organizados bien sea por rearme o por la aparición de nuevos grupos en zonas estratégicas para el narcotráfico. Estas zonas quedan ubicadas en cinco departamentos: Norte de Santander, Nariño, Córdoba, Bolívar y la Guajira.

¹⁹ Ver el Noveno Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, MAPP/OEA, del 3 de julio de 2007. P. 3.

²⁰ De acuerdo con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA en su Octavo Informe Trimestral, publicado en febrero de 2007, los grupos con presencia en los escenarios donde tuvieron influencia las autodefensas son alrededor de 22, con cerca de 3.000 integrantes incluyendo algunos desmovilizados. Según la Policía, estos grupos, que no llegan a tener la presencia territorial de los que se desmovilizaron, se localizan en 102 municipios de 17 departamentos. Otros estudios estiman que en cerca de 200 municipios tienen presencia 34 grupos integrados hasta por 5.000 hombres (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, agosto de 2007).

su base en el Valle del Cauca se extendieron hacia Nariño para garantizar el control de la carretera al mar y el puerto de salida para la droga producida en la costa Pacífica. La muerte de Wilber Varela a comienzos de 2008 en Venezuela, a manos de uno de sus lugartenientes, es el resultado del predominio que *Los Rastrojos* comienzan a tener sobre *Los Machos*.

Según las investigaciones adelantadas por las autoridades, que dieron lugar a la extradición de 14 ex jefes de las autodefensas a los Estados Unidos a mediados de 2008, las estructuras que eran cada vez más visibles por los hechos de violencia que protagonizaban, rendían cuentas a estas personas que continuaban delinquir desde los lugares de reclusión. Entre los jefes extraditados se encuentran Carlos Mario Jiménez, "*Macaco*", Diego Murillo Bejarano, "*Don Berna*", Rodrigo Tovar Pupo, "*Jorge Cuarenta*", Salvatore Mancuso, Hernán Giraldo, Ramiro alias "*Cuco*" Vanoy, "*Pablo Sevillano*", Nodier Giraldo y Francisco Javier Zuluaga, "*Gordolindo*".

Pese a que las bandas que relevan a las autodefensas se presentan como una nueva expresión criminal, se puede reconocer en los mapas 15 y 16 (páginas siguientes), la existencia de continuidad por cuanto en lo esencial se localizan en las mismas zonas y se encuentran bajo el control de narcotraficantes que son parientes o segundones de los jefes que entraron a la negociación en el primer gobierno Uribe Vélez. La continuidad con las autodefensas desmovilizadas se establece en un contexto en el que los cultivos y la droga para la exportación se reducen significativamente, principalmente a partir de 2007, situación que explica el aumento de las disputas entre bandas en zonas estratégicas.

De acuerdo con la Policía, las bandas pasaron de ser 33 en 2006, a 21 en 2007, a 23 en 2008, a 16 en 2009 y a solamente seis en 2011. No obstante, la reducción del número de bandas, su presencia ha tendido a mantenerse en 20 departamentos donde surgieron a partir de 2005 y sus integrantes pasaron de un estimado de 4000 a 5711 en 2011.

Tal como se aprecia en el mapa 17 (página 24), existe una muy fuerte presencia de las bandas que relevan a las autodefensas en escenarios del narcotráfico, en la Sierra Nevada, Bajo Cauca, Alto Sinú y San Jorge, Sur de Bolívar, Urabá, parte de Vichada y Meta, el piedemonte de Caquetá, Bajo y Alto Putumayo, Cordillera y Pacífico Nariñense, así como en corredores que comunican con las costas Atlántica y Pacífica y las zonas fronterizas.

A diferencia de las autodefensas, las Bacrim han sellado alianzas con las guerrillas en algunas regiones del país. En

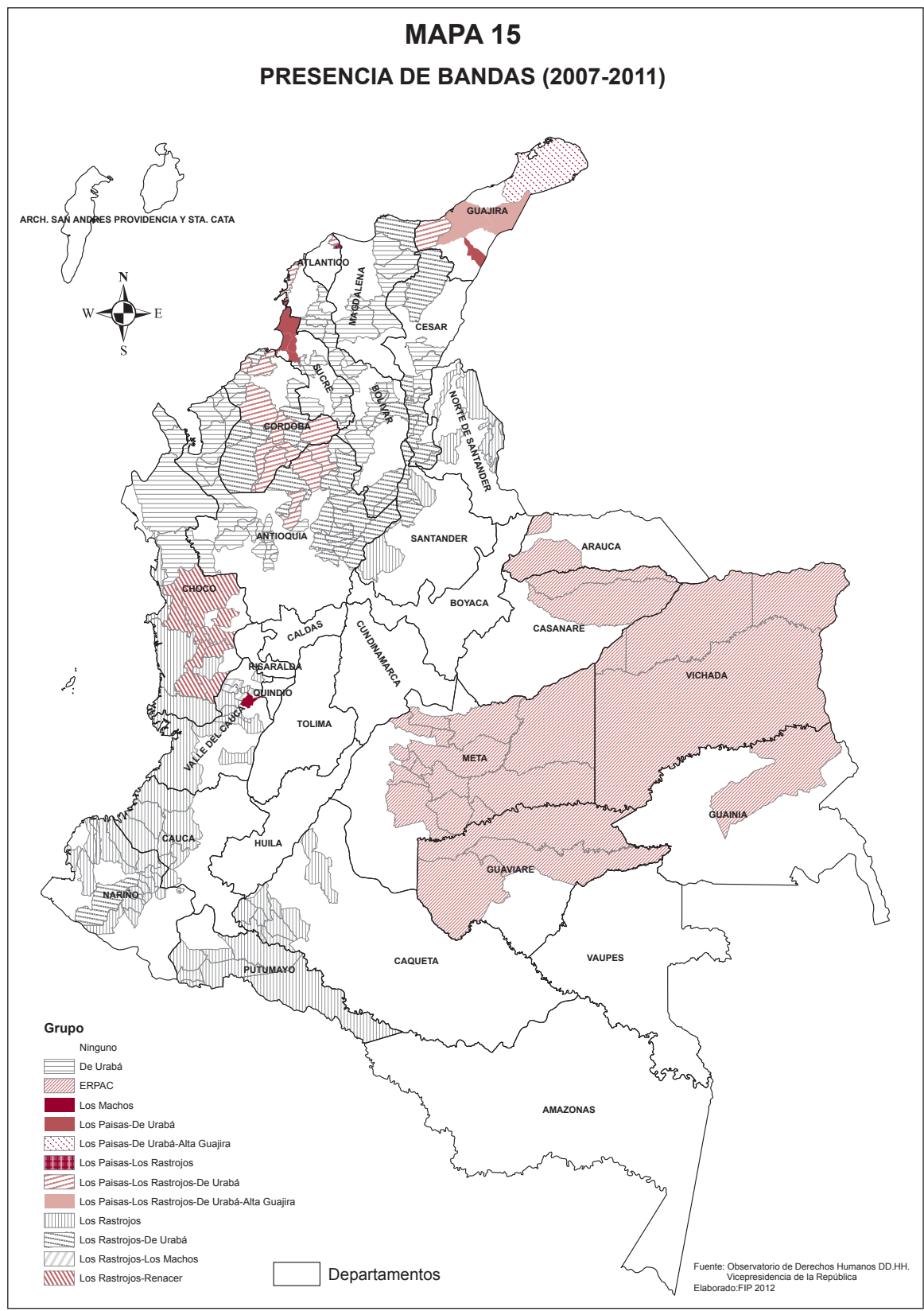
los departamentos de Valle, Cauca, Nariño y Chocó los vínculos con el ELN se han establecido alrededor del narcotráfico, a fin de garantizar corredores y participar en otras actividades ilegales. En el sur de Bolívar, Urabá, Córdoba, Bajo Cauca antioqueño, sur de Cesar, Meta y Vichada, al menos seis frentes de las FARC han pactado el manejo conjunto de los cultivos de coca, la protección de los laboratorios y la utilización de las rutas para la exportación de droga.

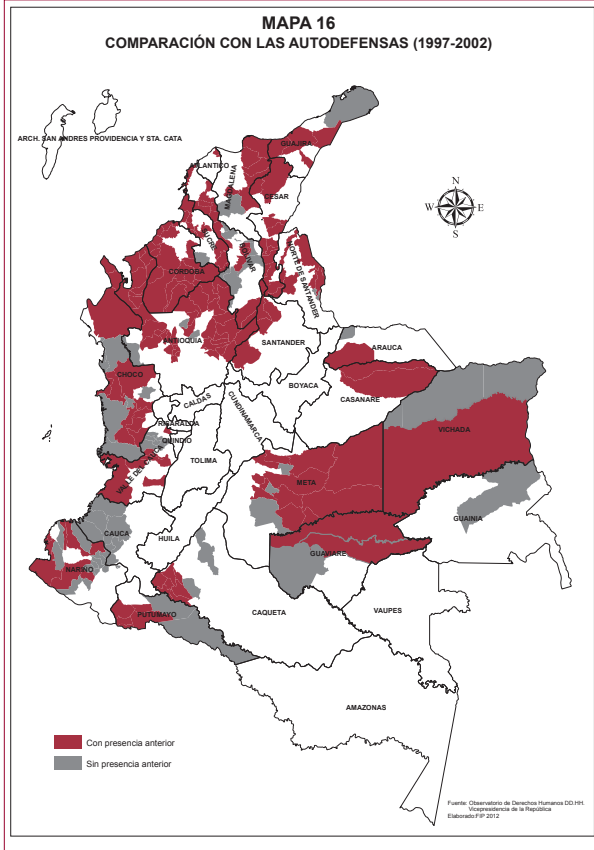
En cuanto a la relación que existe entre el narcotráfico y los grupos irregulares, las autodefensas en el pasado y ahora las bandas se encuentran más vinculadas a la comercialización de estupefacientes, es decir, están más interesadas en controlar las rutas y los puntos de embarque que los cultivos y laboratorios. Con todo, en el 74% del área sembrada en coca se encuentran presentes las bandas siendo más significativa la relación con *Los Rastrojos* y el *ERPAC*. En cuanto a la guerrilla, en particular las FARC, han estado más relacionadas con los cultivos, es decir, con el territorio y el procesamiento de coca hasta la pasta base o el clorhidrato de cocaína, que venden a los narcotraficantes. Por lo anterior, no es de sorprender que hoy tanto las unas como las otras sean funcionales al negocio del narcotráfico y se hayan aliado de manera coyuntural alrededor del mismo (Observatorio de Derechos Humanos y DIH, 2010).

En lo concerniente a la relación entre la minería, las guerrillas y bandas, un estudio reciente señala que en al menos ocho departamentos el oro está desplazando a la coca como la principal fuente de financiación de estos grupos (Massé, 2012). En el 2010, del oro extraído, las FARC se estarían quedando con el 20% del negocio ilegal, seguida por el ELN y las bandas. Tal como se observa en el mapa 17, el 54% de la explotación aurífera corresponde con la territorialidad de las bandas. Particularmente en Antioquia, Chocó, Córdoba, Bolívar, Valle y Cauca la relación es muy significativa con *Los Urabeños* y *Los Rastrojos*.

La fuerte presencia de grupos irregulares en las zonas de explotación minera ha contribuido al incremento de los enfrentamientos entre estos por el control de la actividad. Las exigencias económicas de las bandas a grandes multinacionales van desde una cuota fija mensual, pasando por un porcentaje de lo extraído, hasta la entrega de contratos con sobrecostos. Las bandas han infiltrado empresas y alcaldías para tener el control de la explotación de todo tipo de metales preciosos. Así mismo, están manejando sus propias excavadoras y maquinaria para la exploración minera en el bajo Cauca y el oriente antioqueño, Chocó y Nariño.

Los elevados niveles de violencia que se presentan en los espacios estratégicos para la extracción de rentas ilegales se explican por la actuación de las denominadas





Bacrim, que buscan el control sobre los escenarios en donde la desmovilización de las autodefensas afectó principalmente la unidad del narcotráfico, y de aquí que se desaten disputas entre diferentes facciones²¹.

Tal como lo muestran los mapas 18, 19 y 20 (página 25), una parte importante de los municipios con presencia de las bandas registra asesinatos y/o masacres y en consecuencia altas tasas de homicidios. Los altos niveles de violencia que se observan en el oriente del país, aunque en buena medida se explican por las muertes acaecidas en el marco de la confrontación armada entre el Estado y las gue-

rrillas, especialmente las FARC, también están asociados a las bandas. Por otro lado, los altos niveles que se registraron en el suroccidente, en parte de Nariño, Cauca, Valle y Chocó, aunque tienen relación con la confrontación, se explican principalmente por las disputas entre bandas. Esta situación también se registra en el corredor que va desde Catatumbo hasta el Urabá antioqueño, pasando por el sur del Cesar, sur de Bolívar, Magdalena Medio santandereano, Nordeste, Norte, Bajo Cauca y Urabá antioqueño, así como en el sur de Bolívar.

Las disputas se dan por el control de circuitos ilegales estratégicos para el narcotráfico y en particular cultivos, laboratorios, corredores, puertos de embarque y rutas²². En el Nordeste, el Bajo Cauca y en general en el norte de Antioquia, el sur de Córdoba y el Urabá, se registran disputas entre *Urabeños* y *Paisas*²³, a las que se suman Los Rastrojos que se aliaron con estos últimos para enfrentar a los primeros. La ocurrencia de masacres en estos escenarios corrobora la intensidad de las disputas. En el sur de Bolívar y El Catatumbo, entre 2006 y 2007, se registraron enfrentamientos entre *Águilas Negras* y *Los Mellizos*, y posteriormente, los altos índices responden a la entrada de Los Rastrojos. Recientemente se registran enfrentamientos entre *Los Urabeños* y *Los Giraldo* en Magdalena y La Guajira²⁴.

En Nariño, en 2006 y 2007 las disputas eran entre Rastrojos, ONG y *Águilas Negras*. Posteriormente, Los Rastrojos se impusieron pero sostienen disputas con otros grupos que se evidencian en Tumaco, Barbacoas y El Charco, a través de las masacres y los altos niveles de homicidios. En la cuenca alta del Patía, en el departamento del Cauca, se ha presentado una dinámica parecida a la de Nariño, a la que hay que agregarle que algunas disputas se dieron entre una alianza entre *Los Rastrojos* y el ELN contra las FARC. En el Oriente, hubo intensas disputas entre el EPPAC y particularmente, la *Cooperativa de Seguridad de Meta y Vichada*, pero hay que señalar que estas desaparecieron en el 2007 por el accionar de las autoridades, por un lado, y las presio-

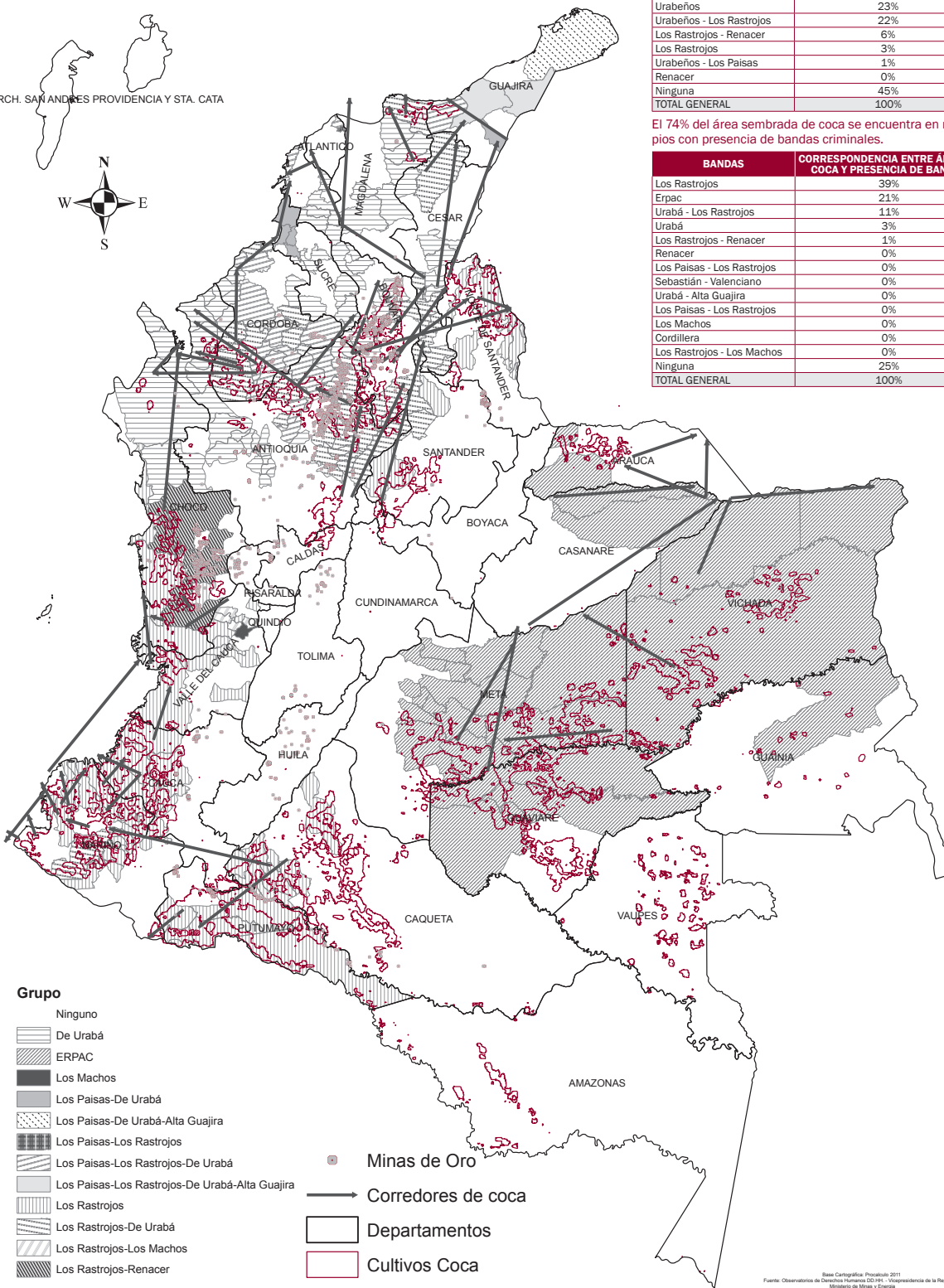
²¹ En el Décimo informe, aparecido a finales de octubre de 2007, la MAPP/OEA reconoció que en la desmovilización de las autodefensas sectores del narcotráfico vieron la oportunidad de ganar control de zonas de cultivos ilícitos y corredores.

²² Ver el análisis detallado por regiones elaborado por Rodolfo Escobedo (2011).

²³ Con posterioridad a la extradición a los Estados Unidos de “Cuco” Vanoy y “Macaco”, Daniel Rendón Herrera, “Don Mario”, se enfrenta a *Los Paisas*, extensión de la *Oficina de Envigado*. “Don Mario” quien heredó la facción de las autodefensas que lideraban los hermanos Castaño, primero se fortaleció en Urabá en donde se alió con desmovilizados del Bloque Élmer Cárdenas que habían estado bajo el mando de su hermano, el ex jefe de las AUC, Fredy Rendón, el “Alemán”, y de otras agrupaciones lideradas por los hermanos Castaño. Después de librar una intensa lucha con *Los Paisas* para lograr el control de una de las principales rutas de exportación de drogas a través del sur de Córdoba y el bajo Cauca antioqueño, “Don Mario” fue capturado por la Policía en 2009. Con esta captura, la banda de *Los Urabeños* pasó a ser controlada por los hermanos Úsuga (Dairo Antonio, “Otoniel” y Juan de Dios, “Giovanni”).

²⁴ El clan de *Los Giraldo*, que son los herederos del exjefe paramilitar Hernán Giraldo, estaban aliados con *Los Urabeños*, pero terminaron enfrentados debido a que el clan comenzó a reclamar la presencia histórica en las zonas clave para el narcotráfico, así como una mayor representatividad en *Los Urabeños*.

ARCH. SAN ANDRÉS PROVIDENCIA Y STA. CATA



El 54% de la minería de oro se encuentra en municipios con presencia de bandas criminales.

BANDAS	CORRESPONDENCIA ENTRE MINAS DE ORO Y PRESENCIA DE BANDAS
Urabeños	23%
Urabeños - Los Rastrojos	22%
Los Rastrojos - Renacer	6%
Los Rastrojos	3%
Urabeños - Los Paisas	1%
Renacer	0%
Ninguna	45%
TOTAL GENERAL	100%

El 74% del área sembrada de coca se encuentra en municipios con presencia de bandas criminales.

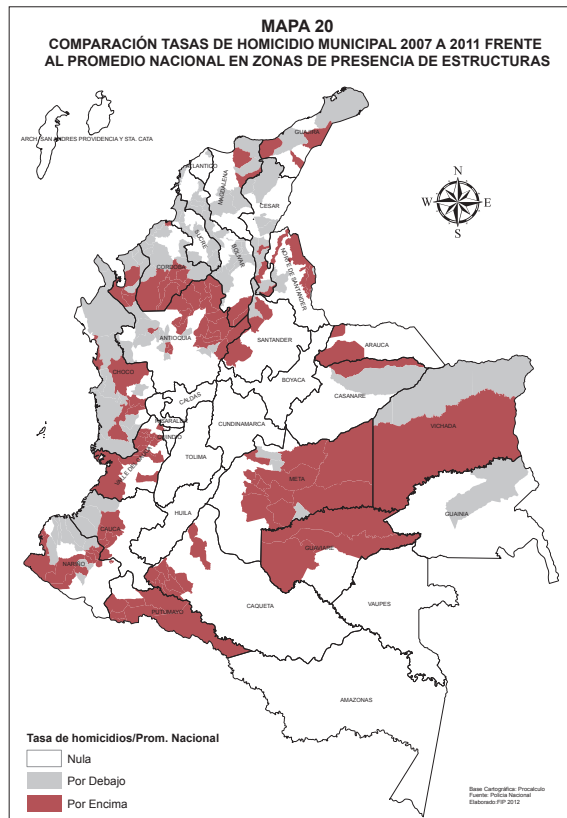
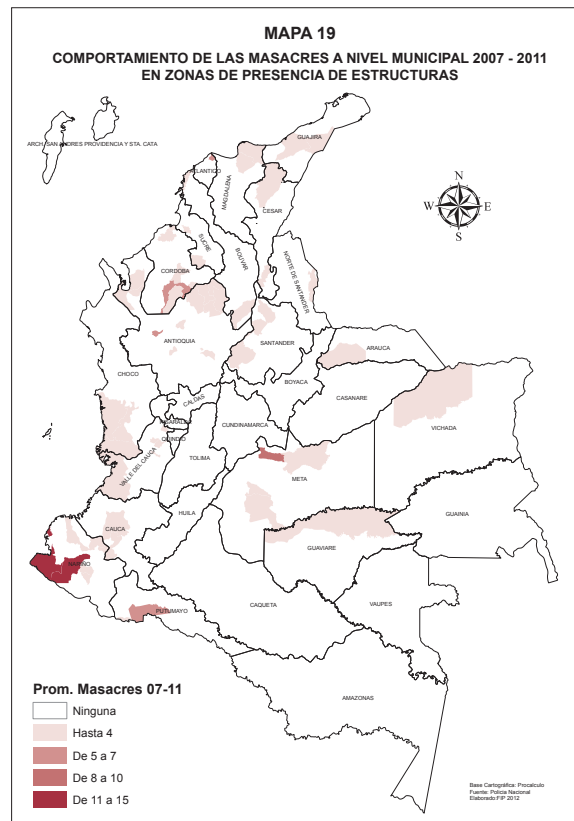
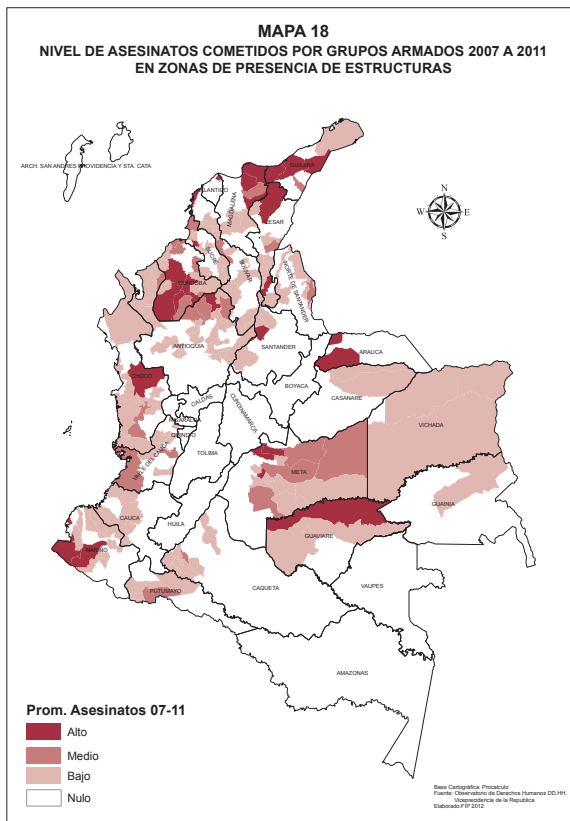
BANDAS	CORRESPONDENCIA ENTRE ÁREA DE COCA Y PRESENCIA DE BANDAS
Los Rastrojos	39%
Erpac	21%
Urabá - Los Rastrojos	11%
Urabá	3%
Los Rastrojos - Renacer	1%
Renacer	0%
Los Paisas - Los Rastrojos	0%
Sebastián - Valenciano	0%
Urabá - Alta Guajira	0%
Los Paisas - Los Rastrojos	0%
Los Machos	0%
Cordillera	0%
Los Rastrojos - Los Machos	0%
Ninguna	25%
TOTAL GENERAL	100%

Grupo

- Ninguno
- De Urabá
- ERPAC
- Los Machos
- Los Paisas-De Urabá
- Los Paisas-De Urabá-Alta Guajira
- Los Paisas-Los Rastrojos
- Los Paisas-Los Rastrojos-De Urabá
- Los Paisas-Los Rastrojos-De Urabá-Alta Guajira
- Los Rastrojos
- Los Rastrojos-De Urabá
- Los Rastrojos-Los Machos
- Los Rastrojos-Renacer

- Minas de Oro
- Corredores de coca
- Departamentos
- Cultivos Coca

Base Cartográfica: Proceluco 2011
Fuente: Observatorio de Derechos Humanos ODH4 - Incidencia de la República
Ministerio de Minas y Energía



nes del ERPAC, por el otro, que se apoderaron del corredor del río Meta en la confluencia entre los departamentos de Meta, Casanare y Vichada.

Si bien los indicadores de homicidios no evidencian la existencia de disputas entre el ERPAC y otras estructuras, con la muerte de “Cuchillo” en 2010 y el sometimiento en 2011 de una tercera parte del componente armado de la organización bajo el mando de “Caracho” y “Vaca Fiada”, se producen recientemente enfrentamientos entre dos facciones disidentes, una controlada por Antonio Navarro, “Flaco Freddy”, y la otra bajo el mando de Martín Farfán, “Pijarvey”.

En la medida en que algunas bandas han sido desmanteladas por las autoridades y que se produjeron disputas entre éstas, en la actualidad cuatro o cinco organizaciones con 4.170 integrantes y presencia en 231 municipios han logrado mantenerse activas, las cuales han articulado las redes existentes, ocupando algunos circuitos ilegales.

Los Urabeños se han fortalecido y también han podido ampliar su presencia territorial, no obstante que la presión de las autoridades ha logrado asestarles fuertes golpes como la captura hacia finales de 2012 de Henry de Jesús López Londoño, “*Mi Sangre*”²⁵, quien logró ascender en *Los Urabeños* tras la muerte de su primo, Juan de Dios Úsuga, “*Giovanni*”. Como represalia por la muerte de “*Giovanni*”, ocurrida a comienzos de este mismo año en desarrollo de una acción de la Policía, la banda promovió un “paro armado” que provocó el colapso del comercio y el transporte en zonas de Magdalena, Antioquia, Chocó, Córdoba, Sucre y Bolívar. Esta demostración de poderío puso al descubierto el aumento en la territorialidad de la organización, que hacia 2008 contaba con presencia en apenas 18 municipios y que en la actualidad pasa de 100, en Urabá, Córdoba, Norte, Bajo Cauca y Nordeste antioqueño, sur de Bolívar, sur del Cesar, sur de Sucre y zona costera del mismo departamento, norte del Cesar, nororiente del Magdalena y sur de La Guajira. Este crecimiento se produjo a costa de *Los Paisas* en Córdoba y Antioquia, pero así mismo aprovecharon espacios que dejaron vacíos las bandas al servicio de *Los Mellizos* Mejía Múnera, no solamente en Magdalena, Norte del Cesar, Atlántico y La Guajira, sino también en el sur de Bolívar y sur del Cesar, donde igualmente pudieron incursionar por el debilitamiento de las *Águilas Negras*.

Los Paisas, que hacia 2008 habían sido debilitados por *Los Urabeños*, construyeron nuevas redes y establecieron alianzas con *Los Rastrojos* para enfrentar a la organización para ese momento bajo el mando de “*Don Mario*”. En 2011, Ángel Pacheco, “*Sebastián*”, quien aparecía como el jefe más visible de la banda, fue asesinado por sus propios hombres. En septiembre de 2012, la Policía Antinarcóticos capturó en zona rural del municipio de Tarazá a Germán Bustos Alarcón, “*Puma*”, jefe de la organización con 200 hombres bajo su mando en el Bajo Cauca antioqueño. “*Puma*”, desmovilizado del Bloque Mineros, se había enfrentado a *Sebastián* y a *Los Rastrojos*. Tiempo después, al lado de “*Mi Sangre*”, se sumó a *Los Urabeños*.

Los Rastrojos, que lograron consolidarse como una organización con acceso al Pacífico, el Atlántico y las fronteras con Ecuador y Venezuela, en 2012 pierden a sus máximos jefes. Primero se entregó Javier Antonio Calle Serna, “*Comba*”, luego la Policía capturó en Venezuela a Diego Pérez, “*Diego Rastrojo*” y por último, la presión de las autoridades obligó a Luis Enrique Calle Serna, “*Comba*”, a entregarse a la DEA en Panamá. Con antelación a estos hechos la organización había registrado una fuerte expansión hacia el Nordeste y el Bajo Cauca antioqueño, el sur de Córdoba, el sur de Bolívar, el sur del Cesar, el Magdalena Medio santandereano, el Catatumbo y Cúcuta. Al parecer, la neutralización de los jefes de *Los Rastrojos* estaría siendo aprovechada en la actualidad por *Los Urabeños* para fortalecer a *Los Machos* y de esta forma ganar espacio para apoderarse de rutas por el Pacífico.

Si bien *Los Machos* tuvieron influencia en el Norte del Valle, Cali, El Cañón de Las Garrapatas y el sur del Chocó, se debilitaron primero por la captura de Diego Montoya, y posteriormente de Omar García Varela, “*Capachivo*”, Jorge Iván Urdinola Perea, “*La Iguana*” y Gildardo Rodríguez Herrera, “*el Señor de la Camisa Roja*”. Tras el sometimiento de su máximo jefe, Hilver Nover Urdinola Perea, “*don H*” en 2011, la alianza establecida con *Los Urabeños* los estaría fortaleciendo. Dicha alianza se selló al tiempo que Víctor Patiño Fόμεque, quien quedó en libertad tras pagar una pena en Estados Unidos, buscó a su antiguo socio “*Martín Bala*” y a *Los Urabeños*, para recuperar los bienes que *Los Rastrojos* le quitaron una vez fue extraditado.

Tras el sometimiento de 272 miembros en diciembre de 2011, poco más de un tercio del componente armado del

²⁵ López Londoño entró al proceso de desmovilización con el Bloque Centauros y fue vocero en las mesas de negociación en Santa Fe de Ralito. Cuando el gobierno tomó la decisión de recluir en las cárceles a los jefes de las autodefensas, huyó a Puerto Berrío. Posteriormente, en 2009, se instaló en Urabá y comenzó a trabajar con los hermanos Úsuga en el control de rutas del narcotráfico. De acuerdo con las autoridades, “*Mi Sangre*” fue capturado en Argentina gracias a informaciones aportadas por fuentes claves.

ERPAC, se produjo una disputa por el control de rutas entre las dos facciones en que se dividió la disidencia. Los enfrentamientos cesaron cuando “*Flaco Freddy*” se quedó con la región del Ariari y Mapiripán, y “*Pijarvey*”, con Vichada. El ERPAC ha venido perdiendo alguna influencia en Casanare y Arauca, mientras que incursionaron en Puerto Inírida, Guainía, e igualmente en El Retorno y Calamar, Guaviare. Es importante señalar que en el pasado el ERPAC estableció alianzas con *Los Rastrojos* para incursionar en otras zonas del país, lo que explica la facilidad con la que esta última banda logró expandirse a Antioquia, Córdoba y Urabá, así como al sur de Bolívar y el Catatumbo. Con las capturas en 2012, primero de “*Flaco Freddy*” y luego de Daniel “*el Loco*” Barrera, cabe preguntarse sobre el nuevo escenario que se abre en el oriente del país en donde todo parece indicar que *Los Urabeños*, quienes se aliaron con “*Pijarvey*”, estarían buscando tomar el control de las principales rutas.

Por último, es importante destacar la incidencia de organizaciones delincuenciales en los contextos urbanos, escenarios donde el negocio de la venta ilegal de droga juega un papel muy importante, tal como lo ha venido registrando Rodolfo Escobedo (2012). Esto tiene como contexto la disminución del tamaño del narcotráfico y evidencia la necesidad de las organizaciones criminales de buscar los recursos que ya no consigue vía las exportaciones. Así mismo, esto ocurre en un contexto en el que la existencia de carteles en México ha reducido los niveles de las ganancias de los narcotraficantes colombianos.

En el caso de Medellín se registra un nuevo repunte de la violencia luego del descenso producido desde 2003, a raíz de la terminación de la disputa por el control de diferentes sectores de la ciudad entre el Bloque Cacique Nutibara y el Bloque Metro de las AUC. El recrudecimiento de la violencia homicida desde 2008 se explica a partir del enfrentamiento, por el control de actividades ilegales, entre narcotraficantes principalmente de la *Oficina de Envigado* y *Los Urabeños*²⁶.

En otros escenarios urbanos se registran articulaciones entre bandas criminales y organizaciones delincuenciales (Escobedo, 2012). En Cali hay relaciones entre *Rastrojos* y/o *Machos*, con bandas y pandillas y a su turno hay disputas por el expendio de droga al menudeo y por otros mercados ilegales. Barranquilla ha tenido presencia de *Paisas*,

Urabeños y *Rastrojos*, que sostienen disputas no solo en torno al narcotráfico sino también en lo que respecta a la venta de droga al menudeo y otros tráficos ilegales. Caso especial es el de Pereira y Dosquebradas en donde la organización *Cordillera* ha acaparado buena parte de la venta de droga al menudeo y se mueve en otros tráficos ilegales. Cúcuta tampoco está exenta de estas prácticas, más aún en la medida en que es un puerto terrestre internacional y por ello hay presencia de *Rastrojos* y otras bandas criminales. Ciudades como Buenaventura y Tumaco son también escenarios en donde la presencia de organizaciones criminales tiene una estrecha relación con el narcotráfico, situación que ha deteriorado la seguridad.

²⁶ Antes de ser capturado, “*Mi Sangre*” se había propuesto ganar el control de las comunas en Medellín y para lograrlo estaba coordinando una avanzada contra los jefes de la *Oficina de Envigado*. De aquí la alianza que estableció en un principio con Maximiliano Bonilla, “*Valenciano*” quien sostenía un fuerte enfrentamiento con Erickson Vargas, “*Sebastián*”, por el control de la *Oficina de Envigado*. Debido a la presión de las autoridades, “*Otoniel*”, máximo jefe de *Los Urabeños*, decidió enviar a “*Mi Sangre*” a Argentina para protegerlo y encargar del control de Medellín a “*Carlos Pesebre*” y a “*don Leo*”.

Sinopsis

En el presente trabajo se identifican tres periodos en la evolución de las organizaciones armadas asociadas al narcotráfico entre 1981 y 2012. A partir de esta periodización se analizan los cambios en las dimensiones geográficas de dichas organizaciones y la relación con el conflicto armado, los cultivos de coca y las manifestaciones de violencia.

El primer periodo considerado entre 1981 y 1993, comprende el desarrollo de la organización Muerte a Secuestradores (MAS) en los años ochenta y la persistencia del llamado fenómeno paramilitar, no obstante que a comienzos de la década del noventa algunas estructuras se sometieron a la justicia. El origen de poderosas organizaciones al servicio del narcotráfico se remonta a comienzos de la década de los ochenta, con la creación del MAS por parte de sectores del narcotráfico afectados por los secuestros de la guerrilla.

Para entender este período, hay que tener en cuenta los cambios ocurridos en el ámbito del conflicto armado. Hacia comienzos de la década del ochenta, las guerrillas que habían nacido veinte años atrás, empezaron a ampliar su presencia a zonas con un elevado valor en el desarrollo de la confrontación, incluyendo los centros urbanos. A la estrategia de ampliación territorial de los grupos alzados en armas se sumó como circunstancia favorable el cese al fuego pactado con las FARC en la administración Betancur (1982-1986), en el marco del llamado acuerdo de La Uribe. El incremento de los secuestros en este periodo llevó a sectores del narcotráfico a organizar aparatos armados propios para neutralizar las prácticas extorsivas de la guerrilla. Estas estructuras hacían referencia al paralelismo entre el incremento de los secuestros y el uso de espacios de apertura en el gobierno Betancur y se comprometían a actuar en contra de los responsables.

Adicionalmente, los acuerdos de conveniencia que existían en las zonas coqueras del sur del país entre las FARC y el narcotráfico, se rompieron debido a las contradicciones surgidas en el proceso de fortalecimiento del aparato armado de la guerrilla, que conllevaría a la imposición de sus condiciones y al cobro de la extorsión. Esto coincidió con la ampliación del MAS en las zonas rurales y en lo esencial, este esquema fue apropiado por un ala del cartel de Medellín liderada, en lo fundamental, por Gonzalo Rodríguez Gacha cuando se produce la ruptura con el cartel de Cali.

En la administración Barco (1986-1990), en medio de la persecución al narcotráfico, el Gobierno se percató del peligro que representaban estas estructuras, convertidas en ejércitos al servicio de la mafia en pleno proceso de ex-

pansión. En consecuencia, en 1989, el Presidente de la República, declaró ilegales las autodefensas. Hacia finales de este mismo año, es dado de baja por la Policía, Rodríguez Gacha, “*El Mejicano*”, uno de los principales responsables de los altos niveles de violencia en los años ochenta.

En la administración de Cesar Gaviria (1990-1994), las autodefensas, que habían crecido de la mano del narcotráfico, se sometieron a la justicia y en varias regiones hicieron entrega de armas. Pese a los esfuerzos del Gobierno para lograr la desactivación de las estructuras paramilitares más poderosas y con mayor cubrimiento territorial, el fenómeno persiste e incluso se amplió.

Entre las agrupaciones que subsisten se impuso la poca unidad, resultado directo de las divisiones al interior del cartel de Medellín. En el sur del Magdalena Medio, en donde la influencia de Rodríguez Gacha y Pablo Escobar había sido determinante, persistieron expresiones muy variadas, divididas y desarticuladas, aun así su influencia se amplió al centro y al norte. Particularmente, en el sur del Cesar, Córdoba y Urabá, en donde Fidel Castaño jugaba un papel muy importante, bajaron su perfil de manera significativa entre 1992 y 1993.

Con posterioridad a la muerte de Escobar en 1993 y a que el terrorismo dirigido principalmente por él contra la extradición alcanzara niveles sin precedentes, se pone en marcha una estrategia encaminada a darle a las estructuras armadas al servicio del narcotráfico una base de legitimidad, ligándolas a la lucha contrainsurgente, ya que ante la ley no eran más que una simple expresión criminal.

En el segundo periodo entre 1994-2002, los grupos de autodefensa buscan el reconocimiento como protagonistas del conflicto y registran su más fuerte expansión territorial en medio de la elevación de la violencia. A partir de la realización de la “Primera cumbre de las Autodefensas de Colombia”, realizada en Cimitarra en 1994, como afirma el sociólogo Fernando Cubides, se esboza una estrategia tosca, sin arandelas, sin pretensiones ideológicas, cuasicaricaturesca en lo que tiene de imitación de aquella de la guerrilla. Dicha estrategia, que se refuerza a partir de 1997 con la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia, tiene el propósito de lograr estatus político para abrir un espacio en la negociación con el Estado.

A diferencia del período anterior, en el que el narcotráfico sometía a las autodefensas, en este, cuando la característica es la desaparición de los carteles colombianos, que paulatinamente fueron remplazados por los llamados carteles mexicanos, son las autodefensas las que someten a los narcotraficantes. Golpeado el cartel de Medellín, al que habían estado atadas las autodefensas, éstas buscaron ca-

pitalizar el narcotráfico bajo el liderazgo de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso. A partir de este momento, las autodefensas comienzan a experimentar un crecimiento territorial sin precedentes y para lograr el control de los escenarios estratégicos asesinan a supuestos simpatizantes de la subversión y recurren sistemáticamente a tácticas de terror.

No obstante que la territorialidad de las autodefensas muestra cambios muy considerables en este periodo, hay continuidad con el dispositivo de los años ochenta en la estrecha relación que se establece con el narcotráfico, tal como lo evidenciaron los casos del Magdalena Medio, Córdoba y Urabá y en el sur oriente en Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo.

La territorialidad de las autodefensas en este periodo evidencia que los intereses de estos grupos desbordan la pretendida dimensión contrainsurgente. En efecto, si se asocia la presencia de este actor con una oferta de protección, se ha visto que no corresponde con la demanda de seguridad, por cuanto la presencia de las autodefensas se establece principalmente en función de los intereses del narcotráfico y no por la amenaza que representa la guerrilla. Este hecho se refuerza al constatar que en tan sólo el 18% de los municipios donde las autodefensas tienen presencia, la guerrilla representa una amenaza a través de su elevada actividad armada, y lo que es más dicente, los cultivos de coca están presentes en algo más de la mitad de estos escenarios. Con todo, es importante tener en cuenta que el dispositivo de las autodefensas sobrepasa los cultivos de coca, pues abarca igualmente corredores entre estos y los puntos de embarque, pasando por los centros de procesamiento. De aquí que en el 82% de los municipios con presencia de las autodefensas, la actividad guerrillera represente una amenaza baja o inexistente.

El cruce de la territorialidad de las autodefensas con la presencia activa de las guerrillas y los cultivos de coca, muestra que en Meta, Guaviare y buena parte de Caquetá, hay una clara correspondencia entre cultivos y la guerrilla, mientras que las autodefensas se sitúan en el entorno de los mismos. En el sur de Córdoba, Antioquia (norte, bajo cauca y nordeste), Sur de Bolívar y Catatumbo, hay una asociación entre la presencia guerrillera y las autodefensas. En el sur occidente de Caquetá, Putumayo, Nariño y Sur de Bolívar, hay una correspondencia muy marcada entre las autodefensas, la guerrilla y los cultivos.

Por otra parte, si bien las autodefensas buscaron su reconocimiento como actor contrainsurgente a través de la realización en diferentes zonas del país de enfrentamientos directos con la guerrilla, estas acciones tienen un patrón geográfico que corresponde principalmente con las áreas

estratégicas para el narcotráfico, tanto en el norte del país, como en el oriente, suroriente y suroccidente. De hecho, en tan sólo la tercera parte de los municipios donde se registran dichos enfrentamientos, la guerrilla representa una amenaza a través de su elevado accionar, pero en cambio, en el trasfondo de la disputa armada aparecen con nitidez los cultivos de coca y las posiciones de alto valor para el narcotráfico.

Por lo demás, el balance de los enfrentamientos directos favorable a la guerrilla, pone al descubierto las enormes deficiencias en el campo táctico y, por lo tanto, la imposibilidad de las autodefensas de derrotar a las FARC. De aquí que la acción de las autodefensas se dirija principalmente contra los civiles que representen el 90% de las víctimas de estos grupos.

Hacia finales de este segundo periodo la ampliación de la territorialidad de los grupos de autodefensa se produjo en razón a que un número significativo de narcotraficantes, mediante la compra de “franquicias”, logró su incorporación a las estructuras existentes, con el propósito de incrementar el control sobre las regiones donde se concentraba el negocio, y una vez convertidos en “comandantes” de las autodefensas, entrar al proceso de negociación en el primer gobierno Uribe Vélez.

El tercer periodo entre 2003-2012 se divide en dos sub periodos. El primero, entre 2003 y 2006, corresponde a la desmovilización de las autodefensas que tuvo un propósito táctico por cuanto las estructuras más poderosas se desmantelan parcialmente y persisten en las mismas zonas. En el segundo sub periodo, a partir de 2005, en parte trasladado con el anterior, estructuras armadas relevan a las autodefensas que entraron a la negociación con el Gobierno.

La desmovilización de las autodefensas, producida en cumplimiento del acuerdo de Santa Fe de Ralito, suscrito el 15 de julio de 2003, en el primer gobierno Uribe Vélez (2002-2006), representó el triunfo de la estrategia diseñada a comienzos de la década del noventa que buscaba el reconocimiento político y abrir un espacio de negociación.

No obstante que las bandas que relevan a las autodefensas se presentan como una nueva expresión criminal, se puede reconocer la existencia de una fuerte continuidad por cuanto en lo esencial se localizan en las mismas zonas y se encuentran bajo el control de narcotraficantes que son parientes o segundones de los jefes que entraron al proceso de negociación.

En la medida en que algunas bandas han sido desmanteladas por las autoridades y que se produjeron disputas entre éstas, en la actualidad cuatro o cinco estructuras con 4.170 integrantes y presencia en 231 municipios han logra-

do mantenerse activas, las cuales han articulado las redes existentes, ocupando básicamente algunos circuitos ilegales. Entre las bandas que desaparecieron se destacan: La *Organización Nueva Generación*; muy variadas expresiones de las *Águilas Negras*; *Los Traquetos* y los *Vencedores del San Jorge*; *La Cooperativa de Seguridad de Meta y Vichada*.

Si bien, en 2012, se ha producido una reducción del 37% en el número de integrantes de las bandas con respecto al año anterior, *Los Urabeños* y *Renacer* han sido las bandas menos afectadas, e incluso, la primera registra un crecimiento en el último año con 1.994 hombres, incluyendo los que se sumaron de *Los Paisas*. La banda *Renacer*, que en el pasado dependía de *Los Rastrojos*, adquirió autonomía y actúa en el sur del Chocó, en donde se ha mantenido con 140 hombres. *Los Rastrojos*, que han perdido a algo más de 400 de sus integrantes, siguen registrando un número elevado con 1.656. La disidencia del ERPAC también ha sido disminuida, pues de los 560 hombres que no se sometieron a la justicia en 2011, en la actualidad permanecen activos 335. Así mismo, *Los Machos* pasaron de tener 55 a 45 integrantes.

No obstante, la reducción del número de bandas, su presencia ha tendido a mantenerse en escenarios del narcotráfico en la Sierra Nevada, Bajo Cauca, Alto Sinú y San Jorge, Sur de Bolívar, Urabá, parte de Vichada y Meta, el piedemonte de Caquetá, Bajo y Alto Putumayo, Cordillera y Pacífico Nariñense, así como en corredores que comunican con las costas Atlántica y Pacífica y las zonas fronterizas.

A diferencia de lo que ocurría en el pasado con las autodefensas, las bandas han sellado alianzas con las guerrillas en algunas regiones del país. En el 74% del área sembrada en coca se encuentran presentes las bandas, siendo más significativa la relación con *Los Rastrojos* y el ERPAC. Al mismo tiempo, hay que señalar que el 54% de la explotación aurífera corresponde con la territorialidad de las bandas, y particularmente en Antioquia, Chocó, Córdoba, Bolívar, Valle y Cauca la relación es muy significativa con *Los Urabeños* y *Los Rastrojos*.

En otro plano, en este trabajo se muestra que a partir de la segunda mitad de la década de los años ochenta, se produce un aumento brusco en los homicidios en coincidencia con la expansión del MAS. El incremento en los homicidios puede atribuirse, por una parte, a la fuerte disputa entre narcotraficantes por el control del negocio y, por otro lado, al fortalecimiento y expansión de los grupos armados irregulares derivado del narcotráfico en medio del debilitamiento de las instituciones estatales y particularmente del sistema punitivo.

En la década de los noventa, se lleva a cabo el proceso de integración vertical de todo el negocio de la cocaína:

siembra, producción de base, refinación y transformación del alcaloide. En Perú y Bolivia bajó la producción y también se aliviaron los problemas de narcotráfico, victorias que por otro lado generaron elevados costos para Colombia, en donde se magnificaron los elementos nocivos derivados de una producción integrada de cocaína.

Las hectáreas de coca cultivadas en el país pasaron de 40.000 en 1990 a 160.000 en 2000, al tiempo que se incrementaba el número de laboratorios para el procesamiento. Este incremento de la actividad ilícita, en buena medida determinó y fue la consecuencia de la expansión territorial y el fortalecimiento de guerrillas y autodefensas. El punto más alto del narcotráfico coincide en buena medida con los niveles más altos de siembras y de toneladas producidas, en el cambio de milenio, pero a diferencia de finales de los ochenta y principios de los noventa, estaba más fragmentado y las ganancias se distribuían en forma más dispersa.

Los homicidios registran un pico en 1991. A partir de este año disminuyen hasta 1998, paralelamente con el desmantelamiento de los carteles de Medellín y Cali. El vacío de poder que sobrevino a la desaparición de los carteles colombianos abrió el camino a los carteles mexicanos que lograron el dominio de la etapa de comercialización al por mayor y al detal en los Estados Unidos y, por otra parte, en el ámbito nacional nuevas organizaciones, entre ellas el llamado cartel del Norte del Valle, se encargan de garantizar la seguridad de los escenarios de producción, transporte y salida de droga.

En este contexto, la expansión de las autodefensas registrada entre 1997 y 2002 se explica principalmente por la búsqueda de mayores rentas provenientes del narcotráfico, lo cual coincidió con el fortalecimiento de la guerrilla, pero este último no es el factor decisivo como se ha afirmado muchas veces. De hecho, el crecimiento de los integrantes de los grupos de autodefensa, que pasaron de 3.800 en 1997 a 12.175 en 2002, se produce en el lapso de mayor auge del narcotráfico.

Entre 1999 y 2002 se produce un nuevo repunte de los homicidios coincidiendo con la más fuerte expansión de las autodefensas, el escalamiento de la confrontación armada y los enfrentamientos entre los grupos irregulares por el dominio de territorios. El aumento de la violencia se produce por cuanto los grupos de autodefensa se enfrentaron con la guerrilla e intensificaron los asesinatos y las masacres en medio del proceso de negociación adelantado por el gobierno Pastrana con las FARC.

La dinámica ascendente de las masacres se explica por la lógica de expansión de las autodefensas, inscrita en

el propósito de crear un corredor que dividiera el norte del centro del país y que, a su vez, permitiera controlar los escenarios de producción de coca entre Urabá, Bajo Cauca, sur de Bolívar y Catatumbo. Posteriormente, los grupos de autodefensa tendrían acceso a las zonas de retaguardia de las FARC, ubicadas en el sur oriente del país.

La tendencia descendente en los homicidios que se observa a partir de 2003, se relaciona con la consolidación de los grupos de autodefensa en varios escenarios regionales en donde establecieron hegemonías de facto contando con el apoyo de políticos, empresarios, comerciantes y de representantes del Estado. De aquí las desmovilizaciones de las autodefensas llevadas a cabo durante la primera administración Uribe y que estos grupos reduzcan los asesinatos y las masacres.

Una vez que las autodefensas se desmovilizan, el narcotráfico entró en su etapa de mayor fragmentación. El vacío de poder que se produjo en muchas regiones rápidamente fue llenándose con las denominadas bandas criminales que buscan mantener el control sobre los territorios en donde la desmovilización de las autodefensas afectó principalmente la unidad del narcotráfico. Las disputas que se desatan entre diferentes bandas explican los elevados niveles de violencia que se registran en los espacios estratégicos para el narcotráfico y la extracción de rentas ilegales.

En definitiva, existe una línea de continuidad histórica que se expresa en la prevalencia de un patrón geográfico de convergencia entre las organizaciones armadas y el narcotráfico. El carácter de las acciones, el sentido de las estrategias y la dinámica de la violencia, evidencian que los grupos paramilitares o de autodefensa en el pasado y las bandas criminales en el presente, se concentran principalmente en la protección de los cultivos y las tierras adquiridas mediante la presión, así como en el control de rutas y puertos para la exportación de droga.

Referencias

- Arias, Gerson y Prieto, Carlos Andrés. (2011). "El Bloque Central Bolívar: Un caso de paramilitarismo y narcotráfico en Colombia", en Restrepo, Elvira María y Bagley, Bruce (Compiladores), *La desmovilización de los paramilitares en Colombia. Entre el escepticismo y la esperanza*. Bogotá, Universidad de los Andes.
- Bejarano, Jesús Antonio, et. al. (1997). *Colombia: Inseguridad, Violencia y Desempeño Económico en las Áreas Rurales*. Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE).
- Camacho, Álvaro. (2011). "Narcotráfico: mutaciones y política", en Gaviria, Alejandro y Mejía, Daniel, *Políticas antidrogas en Colombia: éxitos, fracasos y extravíos*. Bogotá, Universidad de los Andes.
- Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. (2007). *Disidentes, rearmados y emergentes ¿bandas criminales o tercera generación paramilitar?*, Bogotá, Comisión Nacional de Reparación y Rehabilitación, agosto.
- Cubides, Fernando. (1998). "De lo privado a lo público en la violencia colombiana: los paramilitares, en Arocha", Jaime, et al. (comps.), *Las violencias: inclusión creciente*, Bogotá, Utopía Ediciones.
- ____ (1999). "Los paramilitares y su estrategia", en Deas, Malcolm y María Victoria Llorente (comps.), *Reconocer la guerra para construir la paz*, Bogotá, Editorial Norma - Cerec - Universidad de los Andes.
- ____ (2005). "Paramilitares y narcotráfico: ¿Matrimonio indisoluble?", en Rangel, Alfredo (ed.), *El poder paramilitar*, Bogotá, Fundación Seguridad y Democracia y Planeta.
- Dudley, Steven. (2008). *Armas y Urnas: Historia de un Genocidio Político*. Editorial Planeta.
- Echandía, Camilo (2009). *Dinámica espacial del secuestro en Colombia 1990-2007*. Vicepresidencia de la República - Observatorio de Derechos Humanos.
- Escobedo, Rodolfo. (2009). *Dinámica de las bandas asociadas al narcotráfico después de la desmovilización de las autodefensas: 2005-2008*. Bogotá, Vicepresidencia de la República. Observatorio de Derechos Humanos.
- Escobedo, Rodolfo. (2011). *Relaciones del narcotráfico con organizaciones irregulares y delincuenciales y su impacto en la violencia*. Bogotá, Vicepresidencia de la República. Observatorio de Derechos Humanos.
- Escobedo, Rodolfo. (2012). *Construcción del mapa de la criminalidad en los escenarios urbanos*. Fundación Ideas para la Paz. Sin publicar.
- Fundación Ideas para la Paz. (2005). *La derrota de la coca*. Siguiendo el conflicto: hechos y análisis de la semana. Número 17/Junio 17.
- Granada y Sánchez. (2009). "Correlación de fuerzas en disputas de guerras civiles: una aplicación al caso colombiano". En *Guerra y violencia en Colombia*. CERAC y U. Javeriana.
- Massé, Frédéric (2012). *Actores armados ilegales y sector extractivo en Colombia*. Centro Internacional de Toledo para la Paz.
- Medina, Carlos. (1990). *Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia. Origen, desarrollo y consolidación. El caso de Puerto Boyacá*, Bogotá, Editorial Documentos Periodísticos.
- Observatorio de Derechos Humanos y DIH. (2010). *Impacto de la Política de Seguridad Democrática sobre la violencia y los derechos humanos*. Bogotá, Vicepresidencia de la República. Observatorio de Derechos Humanos.
- Organización de Estados Americanos – Secretaría General. (2005, 2006, 2007). *Informes del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA)*, febrero. Documentos disponibles en Internet: www.mapp-oea.org
- Organización de Estados Americanos – Secretaría General. (2009). *Decimosegundo Informe Trimestral del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA)*, febrero. Documento disponible en Internet: www.mapp-oea.org
- Palacios, Marco. (2012). *Violencia pública en Colombia, 1958-2010*. Fondo de Cultura Económica.
- Pécaut, Daniel. (2001). *Guerra contra la sociedad*. Espasa.
- Pécaut, Daniel. (2008). *Las FARC, ¿una guerrilla sin fin o sin fines?*, Grupo editorial Norma.
- Reyes, Alejandro. (1991). "Paramilitares en Colombia: contexto, aliados y consecuencias", en *Análisis Político*, núm. 12. enero-abril.
- Reyes, Alejandro. (2009). *Guerreros y Campesinos*. Fundación Friedrich Ebert y Editorial Norma .
- Salazar, Gustavo. (1999). *Paramilitarismo: una aproximación a sus orígenes y evolución 1980-1999*, Bogotá, Presidencia de la República.
- Tickner, Arlene et. al. (2011). "Actores violentos no estatales y narcotráfico en Colombia", en Gaviria, Alejandro y Mejía, Daniel, *Políticas antidrogas en Colombia: éxitos, fracasos y extravíos*. Bogotá, Universidad de los Andes.



Textos

FUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ

Fotografías

Revista Semana

Diagramación

David Rendón

Preprensa e impresión

Zetta Comunicadores

ISSN: 1909-4310

Fundación Ideas para la Paz (FIP)

Calle 100 No. 8ª – 37 Torre A. Of. 305. Bogotá

Tel. (57-1) 218 3449

www.ideaspaz.org / e-mail: fip@ideaspaz.org

IMPRESO EN COLOMBIA

La Fundación Ideas para la Paz (FIP) es un centro de pensamiento creado en 1999 por un grupo de empresarios colombianos. Su misión es generar conocimiento de manera objetiva y proponer iniciativas que contribuyan a la superación del conflicto armado en Colombia y a la construcción de una paz sostenible, desde el respeto por los derechos humanos, la pluralidad y la preeminencia de lo público. La FIP, con independencia, se ha propuesto como tarea central contribuir de manera eficaz a la comprensión de todos los escenarios que surgen de los conflictos en Colombia, en particular desde sus dimensiones política, social y militar. Como centro de pensamiento mantiene la convicción de que el conflicto colombiano necesariamente concluirá con una negociación o una serie de negociaciones de paz que requerirán la debida preparación y asistencia técnica. Como parte de su razón de ser llama la atención sobre la importancia de preparar al país para escenarios de postconflicto.



FUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ

Tel: (57-1) 218 3449

Calle 100 No. 8A-37, Torre A, Oficina 305

www.ideaspaz.org / e-mail: fip@ideaspaz.org